

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**



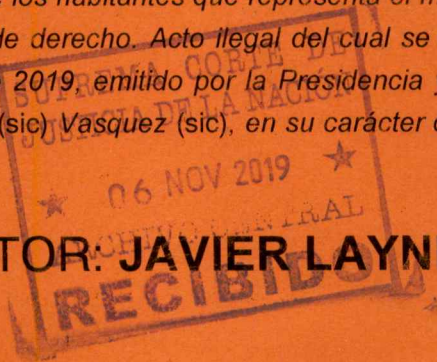
**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
271/2019**

ACTOR: MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DEMANDADO: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ACTO IMPUGNADO: "La dispensa de tramite (sic) aprobada por la XXII Legislatura de Baja California, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de julio de 2019, de la iniciativa de decreto por la que se pretende reformar el Artículo Octavo Transitorio del decreto número 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, parte integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con la consecuencia de omitir convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a la Comisión de Dictaminacion (sic) para que se participara con voz, para presentar observaciones y alegatos, en los trabajos deliberativos de la misma y teniendo perjuicio tanto en los interés (sic) de la autoridad que represento, como en los derechos de los habitantes que representa el municipio respecto de la iniciativa en comento, transgrediendo el estado de derecho. Acto ilegal del cual se tuvo conocimiento, mediante oficio No. 015794, de fecha 08 de julio de 2019, emitido por la Presidencia y Secretaria (sic) del Congreso del Estado, dirigido a Gustavo Sanchez (sic) Vasquez (sic), en su carácter de Presidente Municipal del H. XXII Ayuntamiento de Mexicali."

MINISTRO INSTRUCTOR: JAVIER LAYNEZ POTISEK





SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Folio: 00105768

Expediente:

CC-271/2019

Firma:

**SE PROMUEVE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES.**

**ACTOR; AYUNTAMIENTO DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.**

**PARTE DEMANDADA: XXII
LEGISLATURA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.**

Ciudad de México, a 19 de julio del 2019

**H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN, SECCIÓN DE
TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE
ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS, CIUDAD DE
MÉXICO.-
P R E S E N T E.-**

Lic. Blanca Irene Villaseñor Pimienta, en mi carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, personalidad que se acredita en mérito de los documentos públicos que se anexan, denominado Bando Solemne, expedido por la XXII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, de fecha 30 de noviembre de 2016, Tomo XXIII, número 53, y mediante el cual se da a conocer que el Instituto Estatal Electoral de Baja California, declaró la validez de la elección de municipales por el Ayuntamiento de Mexicali, celebrado el 5 de junio de 2016, y conforme a la cual se designó a la suscrita como Síndico Procurador, propietario del XXII Ayuntamiento de Mexicali, para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 2019; así como el Acta de Sesión Solemne de Instalación y Toma de Protesta del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, de fecha 30 de noviembre de 2016, y conforme a lo dispuesto por el artículo 8, fracción I, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en avenida Paseo de la Reforma no. 2620, interior 17-04A, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 06700, autorizando indistintamente como delegados en los términos amplios del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones IV y V del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Licenciados en Derecho Ana Mónica Ceballos Samperio, Zyanya Cardona García, Fernanda Michelle Gonzalez Miranda, María del Carmen Huerta Santos, David García Romero, Benjamín Muñiz Álvarez del Castillo, Eduardo

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPLENTE DE LA SECCIÓN DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

[Firma]

SAN TEXID



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GEN
RECORDERIA TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

Alejandro Cruz Ramirez, Paula Carina Borbón García, Luis Agustín Rodríguez López, Alma Azucena López Zazueta, Marla Nayeli Luzanilla López, Lessly Adriana Chavez Pimentel, Wendy Isela Huerta Rubio, Luis Alfredo Martínez Angulo, , Ida Nize Campa Hurtado, Cynthia Amaya Álvarez, Maritza Chacón Borboa, Adriana Zaragoza Parada, Federico Guillermo López Lugo, Briceida Gálvez Sánchez, Edna Lizeth Chávez Iglesias, Rafael Gallardo Pimentel, Katherine Valle Alcantar, Urso Gutiérrez Rivera, Lydia Guadalupe Aldapa Burgueño, Rafael Iván Machado López, Ahli Viridiana Madera Chavolla, Jorge Mario Mendoza Orantes, Moises Anguiano Escobedo y Hector Horacio Meillón Huelga, quienes podrán actuar en forma conjunta o por separado; ante esta Corte Suprema comparezco para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 10 y 21 fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro con la personalidad que ostento a promover **CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL**, en contra de la omisión, actos y órganos de poder que precisaré a continuación.

CAPÍTULO DE LEGITIMACIÓN

Se comparece ante esta H. Corte Suprema, a interponer la presente demanda de Controversia Constitucional, con fundamento en los artículos 8, fracción I, de La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, 4 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mexicali, Baja California, y 8 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mismos que a la letra dicen:

Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California

"Artículo 8.- Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento y vigilar que no se afecten los intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:

I.- Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales, así como en las negociaciones relativas a la hacienda municipal, pudiendo nombrar apoderado legal y delegar sus facultades, con arreglo a las que específicamente el Ayuntamiento le delegue..."

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mexicali, Baja California

"Artículo 4.- El Síndico Procurador es el representante jurídico de los intereses del Ayuntamiento, así como el órgano de control y vigilancia de la Administración Pública Municipal, por lo que fiscalizará la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos materiales, además de la actuación de



LA FEDERACIÓN
TICIA DE LA NACIÓN
RAL DE ACUERDOS
E CONTROVERSIA
DE ACCIONES DE
NALIDAD

SIN TEXTO



PODERA JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
WOOSTRUC

los servidores públicos, vigilará que no se afecten los intereses de los habitantes del municipio por actos de la autoridad municipal, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden municipal; investigará la actuación de los servidores públicos municipales; sancionará a quienes resulten responsables de la comisión de faltas administrativas de su competencia; y ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Sindicatura, cuya organización y operación se llevará a cabo conforme a lo establecido en su Reglamento Interno.

La Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California, contará para el ejercicio de sus atribuciones con un presupuesto que en ningún caso podrá ser menor al punto setenta y cinco por ciento del total de los egresos previstos para el Municipio de Mexicali, en el presupuesto correspondiente a cada ejercicio fiscal."

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California

"Artículo 8.- Atribuciones del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento así como la función de contraloría interna, por lo que tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales y en las negociaciones relativas a la hacienda municipal, así mismo para asistir al Congreso del Estado en todos aquellos asuntos concernientes al Régimen Municipal, pudiendo nombrar apoderado legal, con arreglo a las facultades específicas que el Ayuntamiento le delegue; En caso de que el Síndico Procurador, por cualquier causa, se encuentre imposibilitado para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento, éste resolverá lo conducente..."

Sirven de sustento para robustecer lo anterior, los siguientes criterios:

"Novena Época. Registro: 192089. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J.29/2000. Página: 811.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO; Y ANTES DE LA REFORMA, POR INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE DICHO PRECEPTO, VIGENTE EN ESA ÉPOCA."



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INOCENTUC

*“Novena Época. Registro: 192332. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Febrero de 2000, Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J.4/2000. Página: 513.*

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLAS. LA TIENEN LOS SÍNDICOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

*Época: Décima Época Registro: 2000537 Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. XXVIII/2012 (10a.) Página: 1274*

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA.

Época: Novena Época Registro: 175992 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XIII/2006 Página: 1539

**CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. APLICACIÓN DE LAS
REGLAS SOBRE REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES.**

Así, de conformidad con los lineamientos establecidos en los criterios Jurisprudenciales antes transcritos, podemos concluir que la Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, al tener asignada la Representación Jurídica del Ayuntamiento de Mexicali, y siendo la controversia constitucional un procedimiento de carácter Judicial, está legitimada para promover, a nombre y en representación del Ayuntamiento, el presente medio de impugnación en defensa de sus intereses.

CAPITULO SOBRE LA OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN

La Ley reglamentaria del artículo 105 Constitucional no precisa la vía, ni un plazo para combatir las fases del procedimiento legislativo, por lo que debe ponderarse que dichas violaciones crean una situación permanente que no se subsanan mientras no se actúe, esto es, día con día se produce esta situación mientras subsista la omisión de la autoridad legislativa, generando consecuencias jurídicas al mismo tiempo actualizadas. En el caso concreto, como se advertirá posteriormente, el Congreso del Estado, omite convocar a los Ayuntamientos para que dentro de los trabajos deliberativos realicen sus consideraciones y alegatos en relación a una iniciativa de reforma a la Constitución Local, misma sobre la cual deberán pronunciarse para calificar su incorporación; la autoridad legislativa pretende mediante una dispensa de trámite, carente de motivación, y en consecuencia ilegal, afectar dicha prerrogativa otorgada a los Municipios de Baja California, violentando con ello el principio de legalidad, sin que sea jurídicamente posible que una vez

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA
SECRETARIA G
REGISTRARIA
CONSTITUCIONAL
INSTITUTO

publicada la pretendida reforma a la constitución local e inicie la vigencia de la misma, sea reclamada dicha omisión por el Ayuntamiento de Mexicali, al no encontrarse legitimado para promover acción de inconstitucionalidad, es por ello, que se considera que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe declarar oportuna la promoción de la presente demanda, en caso contrario, se estaría privando al Municipio de Mexicali, Baja California, de un recurso idóneo contra la violación constitucional cometida por el Congreso del Estado, al no respetar el proceso legislativo, en concreto la etapa que se reclama violentada.

Época: Décima Época

Registro: 2002365

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1

Materia(s): Común, Constitucional

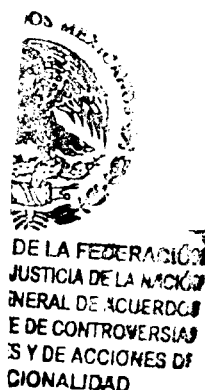
Tesis: 1a. CCLXVIII/2012 (10a.)

Página: 580

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

En la jurisprudencia P./J. 35/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.", el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que en la acción de inconstitucionalidad los actos integrantes del procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general resultante, por lo que es improcedente impugnar individualmente cada fase de éste, pues no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través de su análisis conjunto con motivo de la publicación de la norma, porque es hasta ese momento cuando los actos adquieren definitividad. Ahora bien, a diferencia de lo anterior, en la controversia constitucional las fases del procedimiento legislativo pueden reclamarse sin que pueda alegarse falta de definitividad, ya que en este medio de control no hay limitación a la impugnación de normas generales, lo que permite atacar actos concretos que integran cada una de las fases del procedimiento legislativo, siempre que lo hagan los poderes legitimados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éstos aleguen una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado.

Recurso de reclamación 36/2012-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 68/2012. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 19 de septiembre de 2012.



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SECRETARIA DE
BUREAU DE TRAMITE
CONSTITUCIONALE
INCOGSTITU

Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 35/2004 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 864.

Aunado a lo anterior, de conformidad a los artículos 1, 2, 3, 5 y 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ordena que la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el Municipio Libre, asimismo ordena que el Municipio es el orden de gobierno representativo de la voluntad de los ciudadanos, por lo que, debe jurídicamente existir una relación entre el Municipio y el Gobierno del Estado, bajo los principios de subsidiariedad y equidad, con el propósito de lograr el desarrollo social y humano tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado, del cuerpo normativo Constitucional local, en una estudio integral, se ordena en forma expresa y no optativa una interrelación estrecha e inclusive inseparable del Poder Ejecutivo del Estado con los Municipios, para la implementación y ejecución de políticas públicas, así como de facultades jurídicas, como se desprende de los artículos 49, fracción VIII, XII, XVIII y XX, 81, 83 fracción I, 85 fracción I segundo párrafo y IV, 98, 100 y 104, por lo que es óbice, que es para ello la modificación, reforma o alteración ilegal de la duración de un encargo público de elección popular, afecta en forma directa, y estricta, el ámbito de competencia que la Constitución Federal y Local otorga al Municipio de Mexicali, ya que trastoca de manera directa la relación entre el Poder Ejecutivo y los Municipios, en lo que hace a la planeación y ejecución de políticas públicas, así como la proyección de desarrollo de los Municipios de Baja California; en razón de lo anterior, y de los conceptos de invalidez que en el presente escrito se esgrimen contra la violación inmediata y materializada, ante una incertidumbre jurídica, que en el acto que del Congreso del Estado de Baja California se reclama, se insiste en la procedencia de la demanda que nos ocupa; lo anterior sin abandonar, desatender o desdeñar el quebrantamiento al orden democrático, expresada por los ciudadanos durante la jornada electoral, mediante la cual ante convocatoria del Instituto Estatal Electoral de Baja California, eligieron un titular del Poder Ejecutivo del Estado, por un periodo diverso, al que pretende imponer inconstitucionalmente el Congreso del Estado mediante la iniciativa de reforma de la cual sin motivación alguna se aprobó la dispensa de trámite, para omitir los trabajos deliberativos.

A efecto de satisfacer los extremos del artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proporcionan los datos siguientes:

I. ENTIDAD, PODER U ÓRGANO ACTOR, SU DOMICILIO Y EL NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO QUE LOS REPRESENTA:

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, por conducto de su representante jurídico LIC. BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMIENTA, con el carácter de Síndico Procurador propietario.

II. ENTIDAD, PODER U ÓRGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO:

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA GI
SECCIÓN DE TRÁMI
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU

LA XXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, (Congreso del Estado) con domicilio ubicado en Edificio del Poder Legislativo, Calzada Independencia, No. 994, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California.

III. ENTIDADES, PODERES Y ÓRGANOS TERCEROS INTERESADOS, Y SUS DOMICILIOS:

No existen.

IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE PUBLICÓ:

La dispensa de tramite aprobada por la XXII Legislatura de Baja California, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de julio de 2019, de la iniciativa de decreto por la que se pretende reformar el Artículo Octavo Transitorio del decreto número 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, parte integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con la consecuencia de omitir convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a la Comisión de Dictaminación para que se participara con voz, para presentar observaciones y alegatos, en los trabajos deliberativos de la misma y teniendo perjuicio tanto en los interés de la autoridad que represento, como en los derechos de los habitantes que representa el municipio respecto de la iniciativa en comento, transgrediendo el estado de derecho. Acto ilegal del cual se tuvo conocimiento, mediante oficio No. 015794, de fecha 08 de julio de 2019, emitido por la Presidencia y Secretaria del Congreso del Estado, dirigido a Gustavo Sanchez Vasquez, en su carácter de Presidente Municipal del H. XXII Ayuntamiento de Mexicali.

V. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS:

Artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 39, 40, 115 primer párrafo, fracciones I y III apartado i último párrafo; 116 fracción I, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 29, 30, 31 y 82, Articulo A, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.



LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACION
ERAL DE ACUERDO
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES
CONSTITUCIONALES

VI. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE MANIFIESTAN LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTAN A LA PARTE ACTORA Y QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO IMPUGNADO.

1. Que a fin de dar cumplimiento a lo que mandata el artículo 116, fracción IV, inciso n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Decreto Número 112, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 17 de octubre de 2014, se aprobaron entre otras, la reforma al artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

El Transitorio **OCTAVO** del Decreto apenas referido dispuso lo que para mejor comprensión se transcribe literalmente:

"OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, El Gobernador electo en el

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
PRIMA COFRE DE
SUBSECRETARÍA G
ECCION DE TITULO
CONSTITUCIONAL
— MEXICANA

proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.

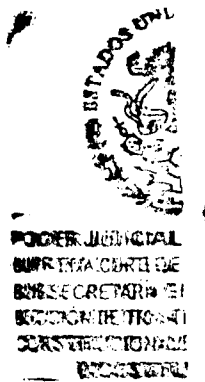
La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 y concluirá el 31 de agosto de 2027."

2. Es el caso, que a las 20:06 horas del día 08 de julio de 2019, la XXII Legislatura del Estado de Baja California, celebró sesión extraordinaria y durante el desarrollo de la misma se presentó a la Presidencia de la Mesa Directiva un documento identificado como *"iniciativa de decreto que reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California"*, aprobado mediante el decreto número 112 ya precisado en el punto precedente.
3. Cabe de mencionar que en el acta en comento no se desprende que se hubiese mandado previamente a los diputados los dictámenes correspondientes de dicha iniciativa en términos del artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
4. Por otra parte, antes de la lectura de la iniciativa, la Legislatura demandada dispensó indebidamente el trámite de turnarla a la Comisión de Dictamen Legislativo; ello a pesar de que no se sustentó las razones que dieran lugar a la necesidad o a la urgencia para discutir el asunto dispensando el proceso a comisión, tal y como le requiere el **artículo 31 de la Constitución Política de Baja California**, que establece: "ARTÍCULO 31.- En los casos de urgencia notoria calificada por mayoría de votos, de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos."; así como en relación con el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, que establece: "ARTICULO 119. Solo podrá dispensarse del trámite de ser turnada una iniciativa o proposición de acuerdo económico a la Comisión competente, en los asuntos que por acuerdo del Pleno del Congreso del Estado, por mayoría simple y en votación económica, se califiquen de urgente y de obvia resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local, la presente ley y su reglamento. **Además de lo señalado en el párrafo anterior, para la procedencia de la dispensa de trámite resultará necesario cuando menos la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto, que de no realizarse traería consecuencias negativas para la sociedad. Así mismo, la condición de urgencia deberá evidenciar la necesidad de omitirse los trámites parlamentarios**



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIA
Y DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD

SIN TEXTO



correspondientes, sin que esto implique la afectación a principios o valores democráticos.

5. Lo anterior, fractura el procedimiento y actualiza un daño a la certeza de los Ayuntamientos, pues, al no existir un argumento que actualice la urgencia o la obvia resolución, se tuvo que dar vista al Ayuntamiento de Mexicali Baja California cuando menos cinco días de anticipación para asistir y participar en el análisis en la comisión respectiva, lo cual no sucedió, pues el mismo 08 de julio de 2019 se aprobó la misma; sin cumplir con las formalidades constitucionales y legales requeridas.
6. De la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio mencionada, se advierte que tiene como finalidad ampliar el periodo para la gubernatura del gobernador que fue electo a 2 años 10 meses; el inicialista expone, que "resulta imperante ampliar el periodo de duración del encargo del Gobernador a 5 años", esto es, de 2 a 5 años, y al tratarse de una modificación a la Constitución local, los Ayuntamientos, como lo es el de Mexicali, Baja California, tiene el derecho y la atribución de participar en la comisión de dictaminación de dicha medida legislativa, pues así lo disponen los artículos 30 fracción II y 82 apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Lo anterior en vinculación con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus artículos 115 y 116, establecen:

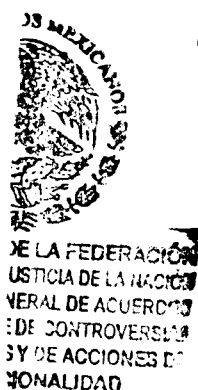
"Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de **gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular**, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[...]

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los gobernadores de los Estados, **cuyo origen sea la elección popular**, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y **por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo**, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JU
SECRETARÍA GEN
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCI

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo."

De las normas constitucionales se deduce que las legislaturas de los estados deben de respetar los principios de la forma de gobierno constitucional, establecidos en el régimen interior de los Estados la cual debe ser *una forma de gobierno republicano, representativo, democrático, y popular*, entonces, al omitir el Congreso del Estado discutir la iniciativa en Comisión ni mandar llamar a los Ayuntamientos del Estado en la cual consideró el Poder Legislativo ampliar el periodo de un Gobernador Electo, tal omisión trastoca la forma de Gobierno Republicana, ya que este principio implica que los gobernantes sólo pueden ejercer el poder por el tiempo para el que fueron electos, y no pueden prorrogarse en ese ejercicio del poder público por ley ni por omisión o acto de autoridad; igualmente viola los principios de democracia y popular; ya que el pueblo que integra el Municipio de Mexicali, se ve representado por el Ayuntamiento de Mexicali, y tiene el derecho de participar en la discusión de una reforma de hondo calado, como fue el caso de la ampliación de una gubernatura ya votada. De ahí el agravio que irroga el Congreso del Estado contra el Ayuntamiento de Mexicali, ya que al omitir involucrarlo en la fase de discusión de la reforma afecta de una manera sustancial la vida democrática de la entidad.

Por otra parte, el acuerdo del Congreso del Estado de Baja California, viola lo establecido en el artículo 116 Constitucional, ya que establece que un Gobernador que haya sido electo para un periodo de gobierno, por ningún motivo puede volver a ocupar el cargo de Gobernador, y que no podrá ser electo para periodo inmediato anterior; esto es, el que el Congreso del Estado amplíe el plazo para gobernar están decidiendo por los millones de electores de la entidad y en contra del texto de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos.

7. Mediante oficio número 015794 de fecha 08 de julio de 2019, signado por el Diputado Presidente Edgar Benjamín Gómez Macías y Diputada Irais María Vázquez Aguiar, ambos integrantes de la XXII Legislatura del Estado de Baja California, notificaron en fecha 09 de julio de 2019 al Municipio de Mexicali, Baja California, una copia certificada de la iniciativa de reforma aprobada mediante dispensa de trámite, para los efectos del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Siendo la materia de impugnación en la presente controversia constitucional *la omisión*, derivada de la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, *de convocar al Ayuntamiento de Mexicali a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos* que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, pues como se expondrá más adelante, la XXII Legislatura demandada tenía la obligación de celebrar la Comisión de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo



LA FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE ACUERDO
DE CONTROVERSIA
Y DE ACCIONES DI
ONALIDAD

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMACIA
SUBSECUENTE
RECOPIA DE FIANC
CONSTITUCIONALES
UNIVERSAL

octavo transitorio y convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, cuando menos cinco días de anticipación a la fecha de la Sesión, a efecto de que concurran al desahogo de las sesiones si lo estiman conveniente, así como también tenía la obligación de substanciar el proceso legislativo en las fases subsiguientes a dicha dictaminación.

Al no hacerlo así, se excluyó indebidamente al municipio actor de participar en los trabajos en los se decidieron cuestiones relevantes para la vida política del Estado de Baja California.

VII. CONCEPTOS DE INVALIDEZ.

ÚNICO.- La XXII Legislatura del Estado de Baja California, no remitió previamente a los diputados los dictámenes correspondientes de la multicitada iniciativa, por ende, no cumplió con lo establecido en el artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; así también, omitió convocar al Ayuntamiento de Mexicali a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución del Estado, ello derivado de la indebida dispensa de trámite de dicha iniciativa, violando así gravemente el proceso legislativo y por ende el principio de legalidad y debido proceso, contenido en el artículo 14 párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su vertiente de indebida motivación, y con esto provocando la invalidez de dicha norma.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y DE ACCIONES FINANCIERAS
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE TURISMO

Lo anterior, ya que con dicha omisión privó sin justificación alguna al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, de su derecho a ser escuchado en la fase de dictaminación, sin justificar la razón por la que se dispensaba el trámite legislativo ordinario que debía seguir dicha iniciativa conforme a las reglas aplicables.

Por lo tanto, al no ser turnada la iniciativa a la Comisión de Dictamen Legislativo correspondiente, y dejar de hacer un serie de actos correspondientes a las fases del proceso legislativo ordinario, como lo es convocar a los Ayuntamientos a dicha comisión de dictaminación para formar parte de los trabajos legislativos relativos a reformas a la Constitución local, en términos de los artículos 30 fracción II y 82 apartado A, fracción III, de la Constitución local y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sin razonar ni justificar que la dispensa de trámite de la iniciativa se aprobaba por tratarse de un caso de urgencia notoria y obvia resolución a que se refiere los artículos 31 y 119 de dichos ordenamientos, justificación que para la procedencia de dicha dispensa era indispensable, en términos del artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de conformidad con la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, número 36/2009, de rubro: **DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE.**

SIN TEXTO



DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D. C.
CONSTITUTIONAL
INVESTIGATION

En el mismo orden de ideas, la siguiente jurisprudencia que emana del Pleno del Décimo Quinto Circuito, aborda también el tema de la invalidez del proceso legislativo, al resultar ilegal la dispensa de trámite por parte del Congreso del Estado de Baja California, cuando no se encuentre debidamente motivada la referida dispensa, criterio que concuerda con el tema abordado en este acto:

Época: Décima Época

Registro: 2007742

Instancia: Plenos de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: PC.XV. J/5 A (10a.)

Página: 1753

DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS POR URGENCIA. LA INDEBIDA MOTIVACIÓN DE LA APROBADA EN LA SESIÓN QUE ORIGINÓ AL DECRETO No. 169 DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO ESTATAL A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, PRODUCE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE PROVOCA SU INVALIDEZ, AL TRASTOCAR LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
E LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ERAL DE ACUERDO
DE CONTROL
Y DE ACCIONES D
ONALIDAD

La dispensa del trámite legislativo a que se refiere el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, relativa a la entrega de los dictámenes a los diputados 3 días antes de su discusión, aprobada "por causa de urgencia" dentro del procedimiento que dio origen a la aprobación del referido decreto, genera una violación al procedimiento legislativo que trasciende de manera fundamental a la norma y provoca su invalidez, al trastocar los principios democráticos, toda vez que los diputados no tuvieron tiempo para conocer y estudiar un dictamen entregado el mismo día en que se votó, no obstante que se le haya dado lectura en sesión, ya que una sola lectura no otorga la oportunidad de asimilar y entender el contenido y los alcances del dictamen para estar en condiciones de discutirlo mediante la generación de un verdadero debate, en términos de los artículos 125 a 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pues no es razonable el tiempo empleado para tal efecto, en tanto que inmediatamente después de la lectura del dictamen correspondiente se pasó a su votación, siendo que las reglas del proceso legislativo deben garantizar un conocimiento cierto, completo y adecuado de las iniciativas que permita a los legisladores actuar con responsabilidad.

PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 8/2013. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del

SIM TEX 110



Décimo Quinto Circuito, y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 25 de agosto de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Isabel Iliana Reyes Muñiz, Julio Ramos Salas, Gerardo Manuel Villar Castillo, Salvador Tapia García y José Guadalupe Hernández Torres. Ponente: Gerardo Manuel Villar Castillo. Secretaria: Xiomara Larios Velázquez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la Paz, Baja California Sur, al resolver el amparo en revisión 10/2013 (cuaderno auxiliar 134/2013), y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión 30/2013 (cuaderno auxiliar 229/2013).

Nota:

Por ejecutoria del 27 de enero de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 279/2015 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Por ejecutoria del 4 de mayo de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 13/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JEFES DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDO GENERAL DE LA NACIÓN
TE DE CONTROVERSIA
ES Y DE ACCIONES C
UCIONALIDAD

Por ejecutoria del 5 de septiembre de 2017, el Pleno del Decimoquinto Circuito, declaró improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia 268/2017 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Por ejecutoria del 18 de octubre de 2017, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 268/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

El Congreso del Estado jamás expuso argumentos que justificaran la dispensa de trámite, pues para ello resultaba necesario que indicaran los hechos que generaron la supuesta condición de urgencia en la discusión y aprobación de reforma constitucional, y que de no realizarse traería consecuencias negativas para la sociedad, máxime que es hasta el día 31 de julio de 2019, cuando fenecería el último periodo de la XXII Legislatura, por lo

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
OPRESA CONTRA
URSPOTTAH. C
ECOMIDE PASHI
ONSTITUCIONAL
INDOSITY

que aún existía el tiempo suficiente para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución del Estado de Baja California, esto es, entregar el dictamen de reforma cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha de la sesión en que debía discutirse el proyecto de reforma constitucional.

En concordancia con lo anterior, esta Autoridad se encuentra facultada para analizar si el proceso legislativo en el que se reformó el artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, se ajustó a los lineamientos básicos de motivación requeridos para la validez de la dispensa de trámite, y como consecuencia de ello, en el momento procesal oportuno, declarar la ilegalidad de la reforma de referencia, argumento que encuentra sustento en el contenido de la siguiente jurisprudencia que emana del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se resolvió la controversia constitucional 32/2007 promovida por el Poder Judicial del Estado de Baja California:

Época: Novena Época

Registro: 165745

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 120/2009

Página: 1255

MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.

Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL E
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA DE
SECCION DE TRAMITI
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUTU

normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LA FEDERACIÓN
 JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
 TRIBUNAL ELECTORAL
 DE LOS JUZGADOS
 DE LOS JUZGADOS
 DE LOS JUZGADOS

Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California. 20 de enero de 2009. Once votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva y mayoría de nueve votos en favor del criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Palomo Carrasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 120/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Se advierte del contenido de la jurisprudencia transcrita, con relación al acto sometido a revisión en esta instancia, que existía la necesidad por parte del Congreso del Estado, de haber llevado a cabo una motivación reforzada respecto la dispensa de trámite autorizada, debido a que en la reforma aprobada estuvieron involucrados principios constitucionales que evidentemente ponen en peligro la democracia en el estado de Baja California,

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
PRIMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE E
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES

al haberse violentado en el proceso legislativo los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 39, 40, 115 primer párrafo, fracciones I y III apartado i último párrafo; 116 fracción I, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo que, en el caso en estudio, no fueron satisfechos ninguno de los requisitos de motivación descritos en la jurisprudencia en cita.

Es así, que el Congreso violó de manera grave el proceso legislativo instituido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, lo que impidió al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, ejercer su derecho de audiencia para opinar, discutir y hacerse representar en el seno de la Comisión de Dictamen legislativo para analizar dicha iniciativa que a la brevedad trascendió a la decisión plenaria adoptada sin tener un razonamiento en el sentido del porqué se omitió turnarla a Comisión y por la escases de un análisis de impacto por el tema en cuestión, ello, a pesar de ser un asunto de suma trascendencia para nuestra entidad.

Omisión que invadió la esfera de atribuciones del orden municipal que represento, debido a la exclusión del Ayuntamiento de Mexicali Baja California por parte del Congreso, de participar en la fase de dictaminación de la iniciativa de referencia, a efecto de ser escuchado, intervención que es un derecho de mi representado y fue soslayada en detrimento del orden constitucional, y cuya observancia a la vez constituye una obligación para el Congreso, de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado, y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Así, resulta evidente que el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California al ser un municipio situado en el Estado de Baja California, debió haber sido convocado a participar y manifestar lo que su derecho conviniera en la fase de dictaminación y toda vez que la medida legislativa incide de manera directa en la vida política de la entidad, y por lo tanto la omisión de referencia afecta un aspecto de su competencia municipal, como lo es participar en las reformas que se pretendan llevar a cabo a la Constitución del Estado, soslayando su derecho y atribución de formar parte de los trabajos legislativos en la comisión de dictamen legislativo que se deriva de los artículos 31 y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución local.

En consecuencia, la XXII Legislatura trastocó el ámbito competencial del orden de gobierno municipal, ya que al omitir, sin causa justificada, convocar al Ayuntamiento de Mexicali de Baja California a la Comisión de dictamen legislativo y a participar en torno a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución local, infringió en perjuicio del Municipio su **derecho de audiencia, debido proceso y legalidad contenidos en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quebrantándose los artículos 29, 30, fracción II, 31 y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los numerales 116, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.**

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
MEXICANO DE
SECRETARIA DE
ECONOMIA Y
CONSTRUCCION
MEXICANA

Al efecto, y para advertir la forma en que fueron infringidos los preceptos de la Constitución General, a continuación se transcribe en la parte que interesa, la iniciativa de decreto legislativo que contiene la reforma cuya invalidez se pretende.

"ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO AL SÉPTIMO.-

OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gubernatura del Estado con el proceso electoral federal de 2024, la Gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024."

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2030, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y uno de agosto de 2030.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
E DE CONTROVERSIA
ES Y DE ACCIONES DE
CONSTITUCIONALIDAD

Para iniciar el estudio de constitucionalidad, previamente es necesario analizar las normas secundarias que rigen el procedimiento legislativo en el Estado de Baja California; porciones normativas que disponen lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 29.- Las iniciativas de ley o decreto deberán sujetarse a los trámites siguientes:

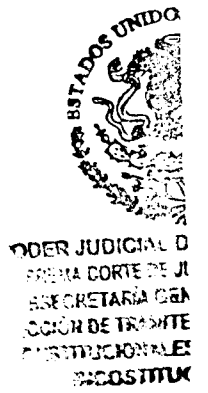
- I.- Dictamen de Comisiones;
- II.- Discusión;
- III.- Votación.

ARTÍCULO 30.- Las comisiones de dictamen legislativo anunciarán al Ejecutivo del Estado, cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de la sesión cuando haya de discutirse un proyecto, a fin de que pueda enviar un representante que, sin voto tome parte en los trabajos.

El mismo procedimiento se seguirá con:

- I.- El Poder Judicial, cuando la iniciativa se refiere a

SIN TEXTO



asuntos relativos a la organización, funcionamiento y competencia del ramo de la Administración de Justicia; y

II.- Los ayuntamientos, cuando la Iniciativa se refiera a los asuntos de carácter municipal, en los términos de esta Constitución.

ARTÍCULO 31.- En los casos de urgencia notoria calificada por mayoría de votos, de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos.

ARTÍCULO 82.- Para el mejor desempeño de las facultades que le son propias, así como para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de las funciones que le son inherentes, los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes:

A. ATRIBUCIONES:

III.- Participar en las reformas de esta Constitución, en los términos previstos por la misma;

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 116. Las Iniciativas de Ley o Decreto deberán sujetarse a los trámites siguientes:

- I.** Dictamen de Comisiones;
- II.** Discusión; y,
- III.** Votación.

ARTÍCULO 118. Todo proyecto se turnará por el Presidente del Congreso a la Comisión que corresponda según la naturaleza del asunto de que se trate.

Si del estudio y análisis de las iniciativas dentro de las Comisiones de dictamen legislativo es necesario complementarlas o clarificarlas, bastará con que así lo manifieste su inicialista o algunos de los integrantes de la Comisión, a través de una adenda en forma escrita, hasta antes de que sean dictaminados por la Comisión respectiva.

El dictamen se presentará al Pleno del Congreso en los plazos señalados en el Artículo 124 de esta Ley,



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
TRATADO DE ACUERDO
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
CONSTITUCIONALIDAD

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
PRIMERA COLECCIÓN DE
JURISPRUDENCIA G
ECIÓN DE TRABAJO
CONSTITUCIONAL
1990-1991

para el cumplimiento de las fracciones II y III del Artículo 29 Constitucional.

ARTÍCULO 119. Solo podrá dispensarse del trámite de ser turnada una iniciativa o proposición de acuerdo económico a la Comisión competente, en los asuntos que por acuerdo del Pleno del Congreso del Estado, por mayoría simple y en votación económica, se califiquen de urgente y de obvia resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local, la presente ley y su reglamento.

Además de lo señalado en el párrafo anterior, para la procedencia de la dispensa de trámite resultará necesario cuando menos la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto, que de no realizarse traería consecuencias negativas para la sociedad. Así mismo, la condición de urgencia deberá evidenciar la necesidad de omitirse los trámites parlamentarios correspondientes, sin que esto implique la afectación a principios o valores democráticos.

No podrá dispensarse el trámite a comisiones de ninguna cuenta pública.

ARTÍCULO 120. Las Comisiones de Dictamen Legislativo respectivas, anunciarán al Ejecutivo del Estado, a los Ayuntamientos y al Poder Judicial, cuando menos con cinco días de anticipación la fecha de la Sesión, a efecto de que concurren al desahogo de las sesiones si lo estiman conveniente; a presentar o hacer valer sus opiniones o alegatos, tal y como lo establece el Artículo 30 de la Constitución Local; además de que el mismo procedimiento se seguirá con el Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto Estatal Electoral, cuando la Iniciativa se refiera a los asuntos de carácter Electoral.

Del análisis sistemático de las porciones normativas previamente citadas, es posible advertir que las iniciativas de ley o decreto deben sujetarse a los trámites de dictamen de comisiones, discusión y votación, por disposición Constitucional.

Dentro del **trámite relativo al dictamen en comisiones**, éstas se encuentran obligadas a anunciar a los municipios, **cundo menos con cinco días de anticipación**, la fecha de la sesión cuando haya de discutirse un proyecto, a fin de que pueda enviar un representante que, sin voto, **tome parte en los trabajos**, cuando la iniciativa se refiera a **los asuntos de carácter**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
E DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
CONSTITUCIONALIDAD

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMACIA DE LA
SUBSECRETARIA DE
SECCION DE DRA. IT
CONSTITUCION MEX
MEXICANA

municipal, tal y como debió suceder a la luz de lo expuesto, en los términos de la Constitución del Estado de Baja California.

Ahora, si bien es cierto la Constitución de Baja California prevé la posibilidad de dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos, también es verdad que como ya se mencionó, esto sólo es en los casos de que exista urgencia notoria calificada por mayoría de votos de los diputados presentes, para lo cual forzosamente deberá acreditarse en términos del artículo 119 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo siguiente:

- La existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto.
- Que de no realizarse traería consecuencias negativas para la sociedad.
- Así mismo, la condición de urgencia deberá evidenciar la necesidad de omitirse los trámites parlamentarios correspondientes, sin que esto implique la afectación a principios o valores democráticos.

Así lo ha establecido la Suprema Corte en diversas jurisprudencias y sentencias, entre ellas la referida 36/2009, de rubro: **DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE**; previendo al efecto la condicionantes referidas que actualmente se encuentran positivadas en el artículo 119 párrafo segundo, aludido con antelación, y así lo dispuso además al resolver la Controversia Constitucional número 58/2013 planteada por el Municipio de Tijuana Baja California, sentando el criterio, que **para la procedencia de la dispensa de los trámites legislativos resulta menester motivar las razones que lleven a calificar un asunto como urgente**.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
E LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
Tribunal de Controversias
Y DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD

Empero, la indebida omisión reclamada al Congreso, de convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a comisión de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio presentada por el Grupo Parlamentario del partido MORENA, es consecuencia de la indebida dispensa de trámite de la misma, (que cabe mencionar se vota la dispensa antes de dar lectura a la iniciativa y orden del día) pues aunque el día 08 de julio de 2019, el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández solicitó su dispensa de trámite, y en su exposición de motivos planteó consideraciones del por qué la reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, ninguna justificación hizo sobre la urgencia de su aprobación sin seguir los trámites legislativos ordinarios previstos en el orden jurídico estatal. Lo anterior provocó que no se discutiera por el Ayuntamiento de Mexicali, ni por ningún otro Ayuntamiento tal iniciativa, es más, tampoco fue discutida por ningún diputado del Congreso del Estado.

Cabe de mencionar que en el acta en comento no se desprende que se hubiese mandado previamente a los diputados los dictámenes

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMACIA DE LA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE ASISTENTE
CONSTITUCIONALES
L. (INCOGNITO)

correspondientes de dicha iniciativa en términos del artículo 18, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Asimismo, nada se dijo y/o discutió sobre la urgencia del tema y de la necesidad de aprobar con dispensa de trámite la iniciativa de reforma, lo cual derivó en la indebida omisión que se reclama de convocar al Ayuntamiento de Mexicali a comisión de dictaminación y desde luego celebrar ésta para participar en los trabajos legislativos, así como realizar los demás actos conducentes parte del proceso legislativo, y patentiza la irregularidad grave en el desarrollo del mismo que se traduce en su invalidez.

Así, con la omisión reclamada a la XXII Legislatura del Estado de Baja California de no convocar al Ayuntamiento de Mexicali a la comisión de dictaminación que se tendría que haber efectuado conforme a las reglas del proceso legislativo para expresarse con relación a la iniciativa de reforma ya expuesta, se vulneraron los derechos constitucionales del Municipio, consagrados en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen:

Artículo 14. *A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

*Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o **derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.*

Artículo 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

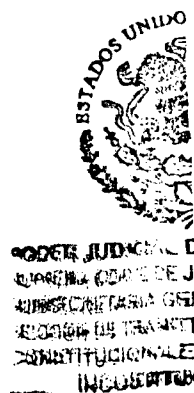
En efecto, el artículo 14 Constitucional, establece la garantía de debido proceso que obliga a las autoridades a cumplir con los procedimientos que las leyes establezcan antes de emitir una resolución que pueda producir una afectación.

En tratándose de actos legislativos, esta garantía se traduce en que las autoridades que participan en el proceso de creación de las normas observen cada una de las etapas previamente establecidas.

Asimismo, en el artículo 16 Constitucional contiene el **principio de legalidad**, mismo que consiste en que, cuando se refiere a actos entre personas de derecho público, exista una norma legal que atribuya a favor de la entidad respectiva la facultad para actuar en la forma precisa y exacta en que lo



SIN TEXTO



disponga la ley; esto es, la autoridad debe ajustar su actuación a la norma legal en la que encuentra fundamento la conducta desarrollada.

Conviene señalar que las disposiciones sobre el proceso legislativo, se encuentran ampliamente reguladas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, pues en los numerales 110 al 164 se señala el trámite que debe dársele a las iniciativas que se presenten ante el Congreso.

Entonces, como se anticipó, para cumplir con estas bases normativas que surgen tanto de la Constitución Local como de la Ley Orgánica mencionada, la XXII Legislatura del Estado de Baja California estaba obligada a turnar la iniciativa de reforma a la Comisión Legislativa correspondiente para su dictamen; pudiendo dispensarse este trámite solo si efectivamente se tratara de un asunto de urgente necesidad y de obvia resolución, conforme lo disponen los artículos 29 y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con los numerales 116, 118 y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para lo cual se tienen que reunir los estándares contenidos en el párrafo segundo del artículo 119 de referencia, que positivaron lo ya definido al respecto por la propia Suprema Corte en la jurisprudencia número 36/2009, ya referida, y justificarse ello en la iniciativa que se apruebe.

Ahora, turnado el asunto a la Comisión de dictaminación, ésta debió anunciar al municipio, cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de la sesión en que se discutirá la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio, a efecto de que el municipio estuviera en posibilidad de concurrir a la sesión, presentar o hacer valer sus opiniones o alegatos, derivado de las atribuciones que al efecto le confiere el orden jurídico, y el interés con motivo de su ámbito competencial que esta autoridad municipal actora tiene interés jurídico en participar en las decisiones que atañen a la vida política del Estado de Baja California, por ser precisamente su participación con voz un derecho con el que cuenta en el proceso legislativo que le corresponde al orden jurídico estatal respecto a reformas constitucionales locales, así como por tratarse de un tema de colaboración armónica de los poderes públicos del Estado de Baja California, tal y como lo disponen los artículos 30, fracción II, y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución Local, y el diverso 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

De ahí que con la omisión del Congreso de convocar a los Ayuntamientos a participar con voz en los trabajos parlamentarios, y demás actos y fases del proceso legislativo, derivado de la injustificada dispensa de trámite de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio precitado, al no expresarse las razones, motivos o causas para poder calificar que se trataba de un caso urgente y obvia resolución, tal omisión infringió los artículos 30, fracción II, y 82, apartado A, fracción III, ambos en relación con el 31, de la Constitución del Estado de Baja California, así como el 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Trascendiendo ello al ámbito competencial del municipio, pues se trastocaron sus derechos constitucionales de audiencia previa del municipio, contenidos

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G
SECCIÓN DE TRAM
CONSTITUCIONAL
INCOSTITU

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de las consideraciones expuestas.

Esto, porque con motivo de la omisión que se reclama, se impidió al Municipio de Mexicali, Baja California, ejercer su derecho constitucional de audiencia para opinar, discutir y hacerse representar en los trabajos de la Comisión de Dictamen, tal y como lo prevé el artículo 30, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y el 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la propia entidad federativa.

De ahí que convocar el Congreso a los Ayuntamientos a comisión de dictaminación para que manifiesten lo conducente, en tratándose de reformas a la Constitución del Estado, no constituye una facultad del Congreso, ni tampoco sea optativo para éste invitarlo, ya que es un derecho de participación de los Ayuntamientos, entre ellos el de Mexicali, en el procedimiento legislativo, el cual está obligado a respetar el órgano parlamentario en términos del propio artículo 30, fracción II y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución local, así como 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pues como lo dijo esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional número 58/2013, **la observancia del artículo 30 de la Constitución de Baja California en modo alguno es optativa para el Congreso del Estado de Baja California.**

Al respecto, en dicha Controversia Constitucional la Suprema Corte reiteró lo sostenido en la 94/2011, señalando al efecto literalmente que en dicha controversia constitucional *"incluso se aclaró por parte de este Alto Tribunal que ello no significaba que la falta de invitación oportuna a los Municipios del Estado de Baja California a participar en el procedimiento legislativo fuera siempre una violación intrascendente, pues el pronunciamiento de dicho fallo tomaba en cuenta toda la serie de peculiaridades fácticas y normativas del caso concreto, para llegar a la conclusión de que, analizada en sus méritos, la violación en que se incurrió no había trascendido a la validez de la norma, pero sin que ello implicara, en modo alguno, que la observancia del artículo 30 de la Constitución Local fuera optativa para el Congreso del Estado de Baja California"*.¹

Por ende, la omisión reclamada al Congreso del Estado incide en el ámbito de competencia municipal, pues es claro que existe un interés jurídico de los

¹ Consideración que rigió al resolutivo tercero de la sentencia de la Controversia Constitucional citada, aprobada por mayoría de ocho votos, y que resulta de observancia obligatoria y constituye jurisprudencia en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de conformidad con la jurisprudencia número 2/2004 de la Suprema Corte, de rubro: JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

SIN TEXTO

Ayuntamientos² derivado de su atribución que le confiere la Constitución local para participar con voz en los trabajos legislativos en el seno de las comisiones del Congreso, en lo concerniente entre otras cuestiones a reformas a la Constitución local.

Ello, porque el derecho con el que cuenta el municipio busca garantizar su participación en las deliberaciones de la Comisión de Dictamen Legislativo, para la aportación de sus opiniones, puntos de vista e información, en observancia al principio democrático que se deriva de los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal.

Participación que como se ha expuesto, se debe verificar en una fase previa a la discusión plenaria y resulta trascendente porque los argumentos o alegatos que exponga el municipio influyen, tanto en la elaboración del dictamen de la Comisión, como en la particular opinión de los diputados que la integran, pues finalmente se somete a votación y son estos quienes ocurren con voz y voto a sesión plenaria.

En ese contexto, al lado de la participación de las fuerzas políticas con representación partidaria representada por los diputados y que tienen derecho a deliberar y votar una iniciativa de ley tanto en las comisiones de dictaminación como en el Pleno del Congreso, coexiste un derecho del municipio para participar en el proceso legislativo, en la fase de los trabajos de la Comisión de Dictamen Legislativo, preparatorios a la discusión plenaria, y con el fin de aportar sus opiniones, puntos de vista e información para enriquecer el dictamen que posteriormente se votará.

Así, ambos derechos previstos en la Constitución se complementan para perfeccionar e integrar la voluntad parlamentaria, por lo que deben de respetarse y observarse.

Por el contrario, si se sostiene equivocadamente que por el sólo ejercicio del derecho de los diputados de deliberar y votar la reforma, no se anula o hace intrascendente el derecho del municipio para ejercer sus atribuciones legales en el proceso legislativo, ello implicaría desconocer y privar a éste de sus derechos constitucionales para participar en la vida política del estado, lo cual a su vez representaría una trasgresión a la legalidad que debe imperar en el proceso de creación normativa.

CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN

Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 14, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de dicho ordenamiento interpretado a contrario sensu, así como 56 y 58 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de

²En términos de lo dispuesto en los artículos 30, fracción II y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL I
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONAL E
NOTS WFFLM

Justicia de la Nación, solicito desde este momento **suspensión con los siguientes alcances:**

1. No se declare la incorporación a la Constitución Política del Estado de Baja California la modificación del artículo octavo transitorio del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, cuya reforma se aprobó por el Congreso del Estado de Baja California, en sesión extraordinaria de fecha 8 de julio de 2019, y de la cual, los Ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito se manifestaron a favor, en tanto se resuelve la materia de la controversia.

2. No se valide el decreto que se derive de la modificación del artículo octavo transitorio del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, cuya reforma se aprobó por el Congreso del Estado de Baja California, en sesión extraordinaria de fecha 8 de julio de 2019, y de la cual, los Ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito se manifestaron a favor, en tanto se resuelve la materia de la controversia.

3. No se apruebe decreto de la modificación del artículo octavo transitorio del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, cuya reforma se aprobó por el Congreso del Estado de Baja California, en sesión extraordinaria de fecha 8 de julio de 2019, y de la cual, los Ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito se manifestaron a favor, en tanto se resuelve la materia de la controversia.

4. No se remita al Poder Ejecutivo, para su promulgación y publicación, la modificación del artículo octavo transitorio del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, cuya reforma se aprobó por el Congreso del Estado de Baja California, en sesión extraordinaria de fecha 8 de julio de 2019, y de la cual, los Ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito se manifestaron a favor, en tanto se resuelve la materia de la controversia.

5. No se promulgue ni se publique en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, Decreto alguno mediante el cual se reforma el artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado de Baja California, de fecha 11 de septiembre de 2014, en tanto se resuelve la materia de la controversia.

Lo anterior es factible, toda vez que dichos actos no se han llevado a cabo, no tienen el carácter de consumados, y en virtud de que con la concesión de la medida cautelar solicitada no se pone en peligro la seguridad o economía de la nación, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni mucho menos puede afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el municipio actor, y en cambio, al concederse la medida cautelar solicitada:

1) Se salvaguarda el orden constitucional evitando la incorporación a la Constitución, promulgación y publicación de un Decreto derivado de un proceso legislativo en el que conforme a los elementos expuestos, se estima



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO
DE CONTROVERSIA
Y DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU

que es probable se haya violado éste gravemente como consecuencia de la omisión injustificada de convocar al Ayuntamiento de Mexicali a comisión de dictaminación, inobservándose las normas constitucionales y legales que rigen a dicho proceso, es decir, el acto reclamado tiene por objeto desconocer el derecho o prerrogativa que la Constitución Política del Estado de Baja California otorga al Ayuntamiento de Mexicali, para presentar o hacer valer sus opiniones o alegatos, por lo que con el otorgamiento de la medida cautelar se protegen las instituciones fundamentales del orden jurídico Mexicano; y

2) Se protege a la sociedad en mayor grado que al propio solicitante, en tanto existe un interés general en que el procedimiento legislativo respectivo se apege a las reglas aplicables.³

De lo contrario, esto es de no otorgarse la suspensión solicitada, en el momento conducente se terminaría declarando la incorporación, promulgando y publicando, quedando sin materia la controversia constitucional; aunado a lo anterior, con el otorgamiento de la medida, se asegura que la sentencia que en su momento recaiga sobre el presente juicio, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que se repare el daño ocasionado al Ayuntamiento de Mexicali, y a la Sociedad en General.

Asimismo, se solicita la concesión de la medida cautelar con base en la figura de la apariencia del buen derecho, ya que como se podrá apreciar de un análisis superficial de la materia objeto de impugnación, existe un alto grado de probabilidad de que la omisión reclamada resulte violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales por no haber sido convocado el Ayuntamiento de Mexicali a participar en la fase del proceso legislativo de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, por parte de la comisión correspondiente del Congreso, derivado de una injustificada, y en consecuencia ilegal, dispensa del trámite legislativo, siendo que existe claramente la atribución y el derecho de los Ayuntamientos a ser convocados y participar en dicha comisión, en términos de los artículos 30, fracción II y 82, apartado A, fracción III, ambos de la Constitución Política del Estado y 120 de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; por lo anteriormente señalado, se solicita se considere la petición de suspensión con la calidad de urgente, para los efectos de los artículos 56 y 58 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PETICIÓN EN LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Si bien en principio de acuerdo con el artículo 105 fracción I último párrafo de la Constitución cuando una controversia constitucional es promovida por un

³ Sustenta lo anterior en lo aplicable, la Jurisprudencia número 160/2000 del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES FACTIBLE SU OTORGAMIENTO CONTRA LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA NORMA ELECTORAL, CUANDO ESTOS ACTOS NO SE HAN EJECUTADO Y SE ALEGA, POR EL PODER EJECUTIVO, VIOLACIÓN AL DERECHO DE VETO.

SIN TEXTO

municipio en contra del acto de un estado, los efectos de invalidez únicamente se surtirían respecto de las partes en la controversia.

En el presente caso, además de estar ante una violación competencial, también se actualiza una omisión de dar participación a un órgano previsto en el proceso de creación normativa, lo que genera un vicio formal del desarrollo del proceso legislativo que trasciende a la validez del mismo y a la postre de la norma producto de éste, por lo que resulta inconstitucional y no puede surtir efectos, razón por la cual respetuosamente **se solicita que en su momento la eventual declaración de invalidez que se resuelva, sea con efectos generales**, dado que la norma general tendría como consecuencia jurídica su inexistencia, derivado de la omisión del vicio sustantivo suscitado en el proceso legislativo.

En mérito de las consideraciones anteriores, procede que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación declare procedente y fundada la presente Controversia Constitucional, con todos los efectos y consecuencias que material y jurídicamente deriven y sean resultado directo o indirecto, de la misma.

V.- CAPÍTULO DE PRUEBAS

Con fundamento en los artículos 31 y 32, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, se ofrecen como pruebas las siguientes:

I) DOCUMENTAL PÚBLICA.- Bando Solemne expedido por la XXII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, de fecha 30 de noviembre de 2016, Tomo CXXIII, número 53, de dicho órgano de difusión, mediante el cual se da a conocer que el Instituto Estatal Electoral de Baja California, declaró la validez de la elección de municipales por el Ayuntamiento de Mexicali.

II) DOCUMENTAL PÚBLICA.- Acta de Sesión Solemne de Instalación y Toma de Protesta del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, de fecha 30 de noviembre de 2016,.

III) DOCUMENTAL PÚBLICA.- Oficio No. 015794, de fecha 8 de julio de 2019, suscrito por los diputados Edgar Benjamín Gómez Macías e Iraís María Vázquez Aguiar, en su carácter de Presidente y Secretaria respectivamente del Congreso del Estado de Baja California, mediante la cual remiten copia certificada de la iniciativa de Decreto aprobada por la XXII Legislatura del Estado, que reforma el artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California mediante Decreto 112 de fecha 17 de octubre de 2014, de igual manera se anexa la certificación del extracto del acta de fecha 08 de julio de 2019, y demás anexos remitidos en copia.

IV) PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto legal y humana, en todo lo que favorezca los intereses de esta autoridad.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DI
SUBSECRETARIA C
RECCION DE TRAM
CONSTITUCIONAL
#COSTIT

28

027078

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2019 JUL 22 AM 11 33

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibi de un enviado en (28) Folios

Con:

- Copia certificada de declaratoria de validez en (5) Folios
- Copia certificada de acta de sesión en (2) Folios incluida su certificación
- un anexo en copia certificada en (31) Folios incluida su certificación
- Asi como (8) copias de traslado de la presente demanda

VICTOR JUAN RUIZ PARCENAS



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE O
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA GENERAL

2019 JUL 22 AM 11 58

SECCION DE TRAMITE DE
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES
Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

SIN TEXTO



LA FEDERACION
NACIONAL DE LA NACION
AL DE ACUERDO
CON CONTROVERSIAS
DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD

PARLAMENTO
FISCAL
1917

SECRETARIA DE JUSTICIA



PODER JUDICIAL
SUPREMACIA DE LA
SUBSECRETARIA DE
SECCION DE LEYES
CONSTITUCIONALES
MEXICO



XXII LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

30

A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SE LES HACE SABER QUE LA HONORABLE XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 36 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EXPIDE EL SIGUIENTE:

BANDO SOLEMNE PARA DAR A CONOCER LA DECLARACIÓN DE MUNÍCIPIES ELECTOS HECHA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

PRIMERO.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California, declara la validez de la elección de Munícipes por el Ayuntamiento de Mexicali, celebrada el 5 de junio de dos mil dieciséis en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

SEGUNDO.- De acuerdo con el cómputo de la elección y conforme a la "Constancia de Mayoría" a la planilla que obtuvo el mayor número de votos en la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, a las "Constancias de Asignación de Regidores por el Municipio de Representación Proporcional", así como del Oficio Número CGE/6332/2016 del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral, documentación recibida en Oficialía de Partes del Congreso del Estado el 20 de junio, 7 y 29 de noviembre de la presente anualidad, respectivamente, los siguientes ciudadanos se declaran electos para ser miembros del Ayuntamiento de Mexicali para el período comprendido del 1 de diciembre del año 2016 al 30 de septiembre del año 2019:

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G
SECCIÓN DE TRÁM
CONSTITUCIONAL
L _ INCOSTITR



XXII LEGISLATURA

El Poder Ciudadano



GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO

GUILLERMO GALVÁN SARIÑANA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMIENTA
SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO

MARGARITA MERCADO MEDINA
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE

HÉCTOR RENÉ IBARRA CALVO
REGIDOR PROPIETARIO

JESÚS ALEJANDRO COTA MONTES
REGIDOR SUPLENTE

NATALIA MARGARITA FIGUEROA GONZÁLEZ
REGIDOR PROPIETARIO

VERÓNICA REYES GUTIÉRREZ
REGIDOR SUPLENTE

JUAN DIEGO ECHEVARRIA IBARRA
REGIDOR PROPIETARIO

HUMBERTO MORENO SADA
REGIDOR SUPLENTE

CARLA ALEJANDRA MALDONADO VALDÉS
REGIDOR PROPIETARIO

MARÍA GUADALUPE OLGUÍN ESPINOZA
REGIDOR SUPLENTE



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO
E DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES O
CIÓNALIDAD

SIN TEXTO

SECRET



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU



XXII LEGISLATURA

El Poder Ciudadano



HECTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ
REGIDOR PROPIETARIO

ROSALIO GARCÍA URSINO
REGIDOR SUPLENTE

EDWVIGES PIO RODRÍGUEZ
REGIDOR PROPIETARIO

ADRIANA NAJERA MONTOYA
REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ ESTRADA
REGIDOR PROPIETARIO

ISAAC GARCÍA GARCÍA
REGIDOR SUPLENTE

MA DEL CARMEN CARRERA MARTÍNEZ
REGIDOR PROPIETARIO

REFUGIO MARGARITA AGUILAR LARRAÑAGA
REGIDOR SUPLENTE

SAMUEL ENRIQUE RAMOS FLORES
REGIDOR PROPIETARIO

J. VENTURA CAMPOS SANDOVAL
REGIDOR SUPLENTE

VIRGINIA NORIEGA RIOS
REGIDOR PROPIETARIO

LORENIA ARLETTE AYALA MEDEL
REGIDOR SUPLENTE



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA PAZ
GENERAL DE ACUERDO
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES D
NACIONALIDAD

SAN TEXO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INSTITUC



XXII LEGISLATURA

El Poder Ciudadano



FRANCISCO JAVIER CITAL CAMACHO
REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ ALBERTO MEDINA PONCE
REGIDOR SUPLENTE

RAMÓN ADRIÁN MARÍN COTA
REGIDOR PROPIETARIO

EFREN ROJAS ROJAS
REGIDOR SUPLENTE

GI SELA GUADALUPE ACOSTA CERVANTES
REGIDOR PROPIETARIO

BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES
REGIDOR SUPLENTE

ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ
REGIDOR PROPIETARIO

LUZ VERÓNICA TORRES IRENE
REGIDOR SUPLENTE

JESÚS HÉCTOR VEGA OLIVARES
REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ FERNANDO AGUILAR JIMÉNEZ
REGIDOR SUPLENTE

TERCERO.- De conformidad con la declaración hecha por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, los Munícipes electos reúnen los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución Local y la Ley Electoral.

SIN TEXTO

SECRET



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G
SECCIÓN DE TRÁM
CONSTITUCIONAL
INCOSTIT



XXII LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

CUARTO.- Se cita a los Munícipes que resultaron electos para integrar el XXII Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, a presentarse el día 30 de noviembre del 2016 a la hora y lugar donde se declare Recinto Oficial Municipal, de conformidad a la Convocatoria que emita el Ayuntamiento saliente, a efecto de protestar el fiel ejercicio de sus cargos, en Sesión Solemne.

QUINTO.- Remítase el presente Bando Solemne al Titular del Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEXTO.- Publíquese el presente Bando Solemne en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de internet del Congreso del Estado.

La información que se da a conocer en el punto **SEGUNDO** del presente Bando Solemne, corresponde a la que fue notificada por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California al Congreso del Estado, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, la cual en su caso, estará sujeta a las resoluciones que se emitan por la autoridad jurisdiccional en la materia.



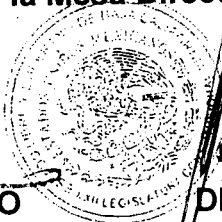
DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO
E DE CONTROVERSIA
Y DE ACCIONES D
CIONALIDAD

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., a 29 de noviembre de 2016.

Por la Mesa Directiva

DIP. RAUL CASTAÑEDA POMPOSO
Presidente




DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN
Prosecretario

EL SUSCRITO, CARLOS FLORES VÁSQUEZ, SECRETARIO DEL 22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI; CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN XVI, DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

CERTIFICA

QUE EL DOCUMENTO CONSTANTE DE 05 (CINCO) FOJAS ÚTILES, IMPRESAS POR UN SOLO LADO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL EJEMPLAR, QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

SE EXTIENDE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.


CARLOS FLORES VÁSQUEZ
SECRETARIO DEL 22 AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE Y
CONSTITUCIONALES
INCOSJTTUCI



LA FEDERACION
NACIONAL DE LA NACION
RAL DE ACUERDO
E CONTROVERSIAS
DE ACCIONES D
ONALIDAD

SIN TEXTO

RECEIVED



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA DE
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INSTITUTO

ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL XXII AYUNTAMIENTO

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las veinte horas del día treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, ubicados en la explanada exterior del Palacio Municipal, sita en Calzada Independencia 998, Centro Cívico, de esta ciudad, declarado como Recinto Oficial por el Cabildo del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35 y 36 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, se reunieron los integrantes del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para llevar a cabo el acto de toma de protesta de los munícipes.

Para dar inicio al acto, y en cumplimiento al primer punto del orden del día, el Secretario-Fedatario del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, Francisco Amador Iribe Paniagua, toma lista de asistencia de los munícipes electos, los Regidores: Gisela Guadalupe Acosta Cervantes, Alejandra María Ang Hernández, Ma del Carmen Carrera Martínez, Francisco Javier Cital Camacho, Juan Diego Echevarría Ibarra, Natalia Margarita Figueroa González, Héctor Guzmán Hernández, Héctor René Ibarra Calvo, Carla Alejandra Maldonado Valdés, Ramón Adrián Marín Cota, Francisco Alejandro Martínez Estrada, Virginia Noriega Ríos, Edwviges Pío Rodríguez, Samuel Enrique Ramos Flores, Jesús Héctor Vega Olivares, Blanca Irene Villaseñor Pimienta, Gustavo Sánchez Vásquez; acto seguido manifiesta que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, constituidos con el objeto de celebrar la **Sesión Solemne de Instalación y Toma de Protesta**, a la que fueron previamente convocados, por lo que declara que existe quórum legal para sesionar.

En cuanto al segundo punto del orden del día, el Secretario-Fedatario, Francisco Amador Iribe Paniagua, cede el uso de la voz al Diputado representante del H. Congreso del Estado de Baja California, Raúl Castañeda Pomposo, quien procede a dirigir unas palabras así como tomar la protesta de ley al Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores.

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el Lic. Gustavo Sánchez Vásquez, Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, expresa: **"Queda legítimamente instalado el XXII Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, que deberá funcionar durante el período que comprende del día primero de Diciembre del año dos mil dieciséis al treinta de septiembre del año dos mil diecinueve."**



Very Obedient Servant

Amador Iribe Paniagua.

EL SUSCRITO, CARLOS FLORES VÁSQUEZ, SECRETARIO DEL 22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI; CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN XVI, DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

CERTIFICA

QUE EL DOCUMENTO CONSTANTE DE 01 (UNA) FOJA ÚTIL, ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL EJEMPLAR, QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.



SE EXTIENDE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ABRIL, DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

CARLOS FLORES VÁSQUEZ
SECRETARIO DEL 22 AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G
RECCIÓN DE TRAMI
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI



DE LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA PAZ
GENERAL DE ACUERDO
TE DE CONTROVERSIAS
ES Y DE ACCIONES DE
ACIONALIDAD

SIN TEXTO



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE I
CONSTITUCIONALES
INSTITUCI



XXII
LEGISLATURA
DE Baja California

#CongresoDeResultados

DEPENDENCIA: CONGRESO DEL ESTADO

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO No.

015784

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Se remite para su opinión Iniciativa de Decreto que reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Local.

LIC. GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ

Presidente Municipal del H. XXII Ayuntamiento de Mexicali

Presente

Por este conducto, y para los efectos constitucionales establecidos en el Artículo 112 de la Constitución Política de nuestro Estado, nos permitimos remitir copia debidamente certificada de la **Iniciativa de Decreto que reforma el artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto número 112 de fecha 11 de septiembre de 2014**; de igual manera se anexa la certificación del extracto del acta en la cual se originaron los debates que dieron origen a dicha reforma en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de julio de 2019, en la cual se aprobó el documento de referencia.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi distinguida consideración y respeto.

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., a 08 de julio de 2019.

Por la Mesa Directiva

LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE LA UNIÓN
DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD

DIP. EDGAR BENJAMÍN GÓMEZ MACÍAS
Presidente

DIP. IRAÍS MARÍA VÁZQUEZ AGUIAR
Secretaria

C.c.p.- Dip. Víctor Manuel Morán Hernández.- Integrante de la H. XXII Legislatura del Estado.
C.c.p.- Lic. Daniel de León Ramos.- Director de Procesos Parlamentarios de la H. XXII Legislatura.
C.c.p.- Lic. Javier Sánchez Chacón.- Coordinador de Órganos de Gobierno
C.c.p. Lic. Anwar Ramos Gaona, Director de Consultoría Legislativa de la H. XXII Legislatura.
EBGM/IMVA/Js'

JUL 09 2019

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONAL
INCONSTITUCION



JUL 09 2019

**INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
 EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO
 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
 BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 112
 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

APROBADO EN VOTACIÓN CON
 CEROVA CON LOS RESULTADOS
 A FAVOR 21 CONTRA 0
 ASISTENCIA 1

El pueblo de Baja California acudió a las urnas confirmando su vocación democrática y su convicción que sólo por las vías pacíficas, institucionales y libres se podrá establecer un sistema de gobierno viable, legítimo y con sustento en el interés colectivo de un estado que construye un destino diferente y está empeñado en acabar con la injusticia social, con la incertidumbre y con los obstáculos que impiden el progreso.

Apegados a derecho, atendiendo el mandato constitucional y, sobre todo, privilegiando el derecho y la libertad de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, nuestro estado ha realizado un proceso electoral ejemplar, un proceso electoral donde todos los ciudadanos votaron y eligieron un gobierno que permita transitar al desarrollo, a la justicia y equidad.

Son los procesos democráticos los que legitiman una sociedad y un gobierno empeñados en transformar su realidad por un futuro más digno y más justo. Esto parte de la vocación primaria de nuestro pueblo por construir una entidad fuerte, unida y comprometida.

LA FEDERACIÓN
 DE LA NACIÓN

Nadie puede atentar contra esta aspiración legítima del pueblo de Baja California. Nadie puede ir contra una decisión soberana de romper ataduras que condenan a los pueblos a vivir en la pobreza, en la injusticia y en la marginación. Es una obligación ver hacia adelante, abrir las puertas de la justicia y establecer las condiciones sociales, democráticas y legales para que el sueño colectivo de dignificación social sea una realidad.

Baja California es hoy una convocatoria social y un reto colectivo. No hay espacio para las exclusiones, no hay tiempo para los debates estériles, no hay motivos para detener la marcha de nuestra historia como pueblo dedicado al trabajo y a la transformación.

El futuro se construye mirando y trabajando hacia adelante, retomando la grandeza de nuestro pasado y estando a la altura de las exigencias y aspiraciones de la sociedad actual y de las nuevas generaciones. Este es el único objetivo que



PODER JUDICIAL D
SUPREMACORTI DE J
SUBSECRETARIA GEA
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
— INSTITUC



como sociedad y como pueblo organizado nos debe convocar. El llamado es a la suma, es a poner por delante el interés superior de los habitantes de este Estado generoso y noble.

Mirando hacia adelante y hacia el futuro que estamos obligados a crear, no se puede pensar en tiempos cortados, en procesos políticos inacabados, en truncar un proyecto que debe ser de largo alcance, con los espacios necesarios y adecuados para hacer posible las acciones públicas que benefician a todos.

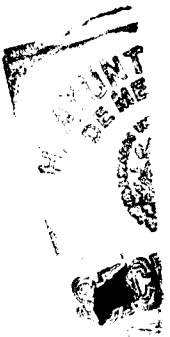
Pensar en grande, imaginar en conjunto, luchar unidos, trabajar en un solo frente, es una tarea fundamental. También es inexcusable enfrentar la difícil situación económica que enfrenta nuestro estado. Dilapidar los recursos del estado, malgastarlo, no está permitido ni es recomendable en esta situación de emergencia financiera.

El compromiso colectivo es trabajar para ser más eficaces y para ser más firmes en los actos públicos, en las acciones institucionales y en todos los procesos de construcción de una sociedad más equitativa. Solo será posible si se establece un gran acuerdo político que trascienda colores y militancias, porque en esta hora de Baja California no caben los disensos sustentados en las visiones parciales de corto plazo.

Baja California actualmente se enfrenta al mayor endeudamiento público de su historia y lo único que hace frente a este endeudamiento es sin lugar a dudas el apoyo de los bajacalifornianos por impulsar la economía de la entidad y esto se puede palpar en su producto interno bruto cuya media según datos del INEGI es del 9%, esto es el resultado del trabajo y esfuerzo de los distintos sectores económicos por generar empleos y mantener viva la inversión en el Estado ya que en el 2018 la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 1,741,615 personas, lo que representó el 62.9% de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, el 97.8% está ocupada y el 2.2% desocupada, en contraposición a estas cifras podemos ver que el gobierno del estado del 100% de sus ingresos según el presupuesto de egresos 2019, tan solo el 10.3% son recursos propios y el 89.7% son participaciones federales.

No se debe seguir escribiendo números rojos en el erario público y en el propio futuro de Baja California, la vida democrática de nuestro Estado, se ha expresado mediante la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, este ejercicio democrático ha representado un costo financiero que cada vez ha ido en incremento, y hoy la ciudadanía nos exige hacer reformar la Constitución Política del Estado, ya que ha manifestado en distintos foros, consultas, debates y

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE D
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES



diversos medios de expresión social, que no es posible que en menos de dos años estemos iniciando un nuevo proceso electoral, que lo único que representará, es un golpe a las finanzas públicas, a las instituciones e indudablemente al desarrollo económico de nuestro Estado, y todo, por no querer escuchar lo que el pueblo demanda. y que es, dejar de dilapidar los recursos públicos en un proceso electoral que no representa beneficio alguno para el pueblo y que solo lo alejará de las urnas.

Estas razones nos obligan hacer una pausa y analizar el impacto financiero procesos electorales contemporáneos han tenido en Baja California.

En el año 2007, se celebraron elecciones para el cargo a Gobernador, en dicha elección de acuerdo al presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2007, y publicada en el Periódico Oficial número 54, tomo CXIII de fecha 22, de diciembre de 2006, se destinaron los siguientes recursos:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad de \$13,114,504.00 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California, le correspondió la cantidad de \$202,319,197.00 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2007, donde resulto ganador de la elección el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se sufragó la cantidad de **\$215'438,701.00.**

119
En la elección del año 2013, el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2013, y publicado en el Periódico Oficial número 59, tomo CXIX de fecha 31 de diciembre de 2012, precisa que el recurso que correspondió en materia electoral derivado del proceso fue el siguiente:

LA FEDERACIÓN
TODOS LOS
RAL DE ACUERDO
E CONTROVERSA
DE ACCIONES
INALICADO
El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California le otorgaron la cantidad de \$19,257,722.54 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le correspondió la cantidad de \$276,373,358.80 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2013, donde resulto ganador de la elección el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, se sufragó la cantidad de **\$295'631,081.34** esto es **\$80,192,380.34** más que el proceso anterior

125
Para el proceso electoral del año 2019, el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019, y publicado en el Periódico Oficial número 60, tomo CXXV de fecha 31 de diciembre de 2018, en el que se estableció que el recurso destinado a dicho proceso fue el siguiente:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad de \$24,248,823.60 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES



correspondió la cantidad de \$469,654,626.60 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2019, donde resulto ganador de la elección el C. Jaime Bonilla Valdez, se sufrago la cantidad total de **\$493'903,450.20**, esto es **\$198,272,368.86**, más que el proceso anterior.

En esta elección, el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Baja California en sesión ordinaria el día 02 de mayo de 2019, y con número de decreto 345, otorgó una ampliación de recursos al Instituto Estatal Electoral de Baja California por la cantidad de **\$10,047,838.00**.

Sumando esta ampliación, el proceso electoral de 2019, tuvo un costo total por la cantidad de **\$503'951,288.20** con esto en total de la elección le costo al estado un monto de **\$208,320,206.86** que el proceso inmediato anterior.

Tomando en cuenta las cifras anteriores, resulta más que motivado, la exigencia de la ciudadanía respecto a no celebrar elecciones en un periodo tan corto, y es que no se puede seguir pasando por alto el incremento súbito del presupuesto que se ejerce en cada proceso electoral y más aún cuando Baja California es uno de los Estados más endeudados del país, cuando estamos en la época de la austeridad republicana, cuando lo que se necesita es que el recurso público se emplee en acciones de beneficio tangible para la ciudadanía; por que pensar en celebrar una nueva elección de Gobernador para el año 2021, cuando esto representaría erogar una suma mayor a los quinientos millones de pesos, lo cual pondría a nuestra Entidad en una situación financiera más precaria, sin que medie una razón real y de beneficio social para los bajacalifornianos, los ciudadanos están cansados de la corrupción y de los gastos excesivos.

LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Resulta imperante ampliar el periodo de duración del encargo del Gobernador, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ya que de lo contrario no podrían establecerse de forma adecuada, el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes regionales, lo cual indiscutiblemente generaría incertidumbre económica, política y social, aunado al gasto extraordinario que conllevaría llevar a cabo elecciones para gobernador en 2021; consecuencia del corto periodo de duración del cargo de Gobernador del Estado, el cual es de 2 años y 10 meses, de conformidad con lo señalado en el transitorio octavo del decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra Constitución Política Local, elecciones que debido al costo económico, resultarían en un duro golpe a las de por si maltrechas finanzas publicas del estado, lo cual se reflejaría de manera inevitable en la economía, los servicios públicos y el bienestar integral de los bajacalifornianos.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU



La ampliación del periodo de duración del encargo para Gobernador del Estado electo a 5 años en lugar de 2 años 10 meses, resulta idóneo, para satisfacer el propósito constitucional de homologar las elecciones estatales con las elecciones federales del proceso electoral 2024, conforme con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base V y 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La voluntad y el sentir de los bajacalifornianos plasmada en esta iniciativa, se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipulados en la fracción segunda del artículo 105, donde se impuso un periodo de 90 días antes de iniciado un proceso para la promulgación y publicación de leyes electorales y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, esto ultimo denota la viabilidad de reformar el transitorio octavo del Decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra Constitución Política Local y así poder darle a Baja California un Gobierno que en conjunto con el Gobierno Federal lleven un periodo de gobernabilidad más estable y en benéfico de nuestra entidad.

La presente iniciativa, no es una norma general electoral, pues no tiene injerencia en el régimen normativo de los procesos electorales del Estado, propiamente dicho o en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, pues la iniciativa no propone regular aspectos vinculados directa o indirectamente o que deban influir en o con los procesos electorales de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistribución, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, funcionamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las aportaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas, sanciones; mucho menos trastoca o infiere en alguno de los principios de la materia electoral, respecto a las elecciones, sufragio, candidatos y demás; por lo que la presente iniciativa no impacta en aspectos relativos a los procesos electorales, de los previstos por la Constitución Federal.

Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia numero P. XVI/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente:

NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 25/99,

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE Y
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES



publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, *Novena Época*, Tomo IX, abril de 1999, página 255, con el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.", sostuvo que las normas electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos o que deban influir en ellos. Ahora bien, de los artículos 41, primer y segundo párrafos, 115, fracciones I y VIII, 116, fracción IV, inciso a), y 122, apartado C, bases primera y segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que ésta prevé principios para la elección de determinados servidores públicos, a saber: los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos), lo que implica que a otros niveles puede preverse legalmente la elección de ciertos funcionarios, pero los procesos no se regirán por dichos principios, por lo que si una ley establece que la designación de un servidor público diverso a los señalados debe hacerse mediante elecciones, ello no le confiere el carácter de electoral, porque para tener tal calidad es necesario que regule aspectos relativos a los procesos electorales, que son los previstos por la Constitución Federal.

Continuado a lo anterior, es necesario comentar que esta iniciativa no puede considerarse como una modificación fundamental, tomando como referencia uno de los elementos de procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, el cual se cita a continuación:

"Una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales".

Así, las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos rectores señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante el proceso electoral; por consiguiente, si las modificaciones tienen como



PODER JUDICIAL E
SUPREMA CORTE DE JI
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUC



única finalidad precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su aspecto formal, la reforma no tendrá el carácter mencionado". (**Acción de inconstitucionalidad 139/2007**)

Como se puede apreciar, esta modificación no altera ninguna de las bases, reglas u otro elemento rector de los procesos electorales, pues no se crean obligaciones nuevas, tampoco introduce nuevas reglas, no trastoca el rubro del financiamiento público, ni mucho menos crea, modifica o elimina derechos a quienes pudieran participar, o bien a los partidos políticos participantes, de igual manera esta iniciativa no genera obligaciones de hacer o no hacer a las autoridades electorales, en este sentido es imperante precisar que existen excepciones las cuales han sentado precedentes en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de ellas la (**Acción de inconstitucionalidad 139/2007**) que han sido acompañadas por la opinión de la Sala Superior de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual ya se han realizado modificaciones a leyes electorales en procesos ya iniciados, y que a pesar de haber sido controvertidas, resultaron operantes y pudieron aplicarse a los procesos electorales en turno, siendo esto corroborado al consultar en tesis de jurisprudencias, como la que se cita a continuación:

P./J. 98/2006 del siguiente rubro: **"CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO."** Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1564, se refirió a dichas modificaciones como aquellas que alteran sustancialmente disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral; en este orden, si las citadas modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio o de aplicación contingente, su realización dentro del proceso electoral no producirá su invalidez o, en su caso, la inaplicación al proceso correspondiente.

En este mismo sentido y con la finalidad de nutrir la fundamentación legal de esta iniciativa, en lo referente a los alcances a la expresión **"modificaciones legales fundamentales"** se cita la siguiente tesis:

P./J. 87/2007 del siguiente rubro: **"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES', CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105**

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONALE
— INCOSTITU



DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS El citado precepto establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte, del procedimiento de creación de dicha norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que, en su caso, las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta resolviera las contiendas antes del inicio del proceso electoral correspondiente, garantizando así el principio de certeza que debe observarse en la materia; sin embargo, la previsión contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como tajante, toda vez que admite la realización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no constituyan "modificaciones legales fundamentales".

Por lo anteriormente expuesto, reformar el Decreto No. 112, publicado en el Periódico Oficial Número 50, Sección I, Tomo CXXI, de fecha 17 de octubre de 1984, es totalmente viable, aunado al hecho de que el Congreso del Estado cuenta con la libertad de configuración legislativa reconocida constitucionalmente, desde esa óptica, la jurisprudencia en materia constitucional ha sido constante, tanto en considerar proscrita la irretroactividad de la ley que irroga perjuicios al gobernado, como en estimar válidas las facultades del legislador para introducir nuevas normas, modificando o derogando las existentes de acuerdo con las necesidades que demande la sociedad.

Con esta iniciativa atendemos al llamado del pueblo bajacaliforniano y al que la propia historia nos convoca por trabajar por la grandeza de Baja California. El futuro nos convoca a sumar esfuerzos y voluntades para ser hijos dignos de este tiempo y es la hora de nuestro pueblo. Baja California tiene destino y ese destino depende de lo que seamos capaces de hacer hoy.

Baja California tiene que construir su futuro con base en actos de ley, con determinación y con conciencia histórica. Nuestro origen y destino es de grandeza. Estamos llamados a sentar las bases para que esto sea una realidad. Esto es, se debe hoy trabajar para que nada se interponga en el acuerdo conjunto de trascender en el tiempo y en la memoria.

SECRET

SECRET



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GE
SECCIÓN DE TRAMIT
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU



Por las anteriores consideraciones se presenta ante esta Honorable Asamblea, la presente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 112 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014, para quedar como sigue:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO AL SÉPTIMO.-

OCTAVO.-OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gubernatura del Estado con el proceso electoral federal de 2024, la Gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024.

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2030. Por una ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2030.

DE LA FEDERACIÓN
JEFATURA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO
DE CONTROVERSIA
SUS AGENCIAS
CIONALIDAD

NOVENO AL DECIMO NOVENO.- ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y proveerá el debido cumplimiento al presente Decreto.

SIN TEXTO

H. AYUNTA
DE MEXI
SECRE

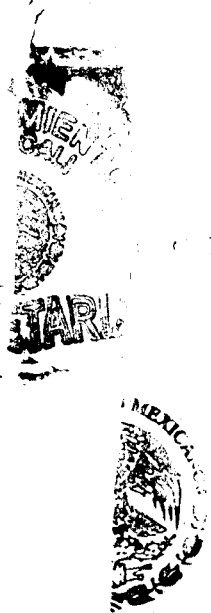


PODER JUDICIAL DI
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARIA GEN
BECCION DE TRAMITE/
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUCI

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 4 días del mes de julio del
año 2019.


Dip. Víctor Manuel Moran Hernández




LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
CONSTITUCIONALIDAD

La suscrita **Diputada Iraís María Vázquez Aguiar**, Secretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

CERTIFICA:

Que el presente documento integrado por diez (10) fojas útiles por un solo lado, es copia fiel y exacta del original que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto número 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, misma que fue aprobada en Sesión Extraordinaria Celebrada el 08 de julio de 2019. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los ocho días del mes de julio del año dos mil diecinueve. - Doy fe. -----



DIP. DIPUTADA IRAÍS MARÍA VÁZQUEZ AGUIAR
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

PODER JUDICIAL DE
PRIMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
ECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INCOSTITUCIO



EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES "LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA", EL DÍA LUNES OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDENTE, C. DIP. GÓMEZ MACÍAS EDGAR BENJAMÍN
(Asistencia de veintitrés ciudadanos Diputados)

SECRETARIA, DIP. VÁZQUEZ AGUIAR IRAÍS MARÍA

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las veinte horas con seis minutos del día lunes ocho de julio del año dos mil diecinueve, el Diputado Presidente

de esta Mesa Directiva da inicio a la Sesión Ordinaria del Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Vigésima Segunda Legislatura del Estado de Baja California; acto seguido,

el Diputado Presidente le solicita a la Diputada Vicepresidenta en funciones de Secretaria, proceda a pasar lista de asistencia, misma que certifica la presencia de los Ciudadanos Diputados:

"Agatón Muñiz Claudia Josefina, Arango Pérez José Félix, Arregui Ibarra Alejandro, Bentley Duarte Victoria, Casas del Real José Antonio, Castañeda Pomposo Raúl, Corona Bolaños Cacho Marco Antonio, García Dworak Ignacio, Gómez Macías Edgar Benjamín, Hernández Álvarez Mónica, López Gorosave Rocío, Morán Hernández Víctor Manuel, Montoya Gaxiola Job, Osuna Millán Miguel Antonio, Padilla Muñoz Bernardo, Peñaloza Valdez Alfa, Ríos López Blanca Patricia, Tolento Hernández Sergio, Torres Torres Carlos Alberto, Vaca Chacón María Trinidad

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GE
RECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONALES
INGOSTITU



y Zavala Márquez Catalino. Asimismo, se justifica la inasistencia del ciudadano Diputado: Núñez Lozano Jorge Eugenio. Estando ausentes los ciudadanos Diputados: De la Rosa Anaya Andrés y Vásquez Hernández Eva María.

Enseguida, el Diputado Presidente, toda vez que el orden del día aprobado por la Junta de Coordinación Política ha sido distribuido con anticipación a los señores Diputados y Diputadas vía electrónica, le solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a consideración de la asamblea en votación económica la dispensa de su lectura y en su caso su aprobación, resultando aprobado por mayoría de los Diputados presentes.

Se continua con el apartado del orden del día, que se refiere a: **"Iniciativas"**, en donde hace uso de la voz el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, para presentar a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario de MORENA una iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Aprobado mediante Decreto Número 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014; y de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicita se someta a consideración del pleno la dispensa de trámite de la presente iniciativa, por calificarse como urgente y de obvia resolución. Asimismo solicita que en caso de ser aprobada dicha dispensa de trámite y una vez que sea discutida, se someta a votación por cédula dicha iniciativa, de conformidad con el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DI
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARIA GENI
RECCION DE TRAMITEI
ONSTITUCIONALES
INCOSTTUCI



Acto seguido la Diputada Vicepresidenta, en funciones de Secretaria, hace constar la presencia de la Diputada Iraís María Vázquez Aguiar.

Enseguida, el Diputado Presidente, en base a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso, declara abierto el debate de la dispensa de trámite de la Iniciativa presentada por el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a los ciudadanos Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite solicitada; en donde interviene el Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, para manifestarse en contra de la dispensa de trámite; enseguida y no existiendo más oradores ni a favor, ni en contra, el Diputado Presidente, solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a votación económica dicha dispensa, resultando aprobada con veintiún votos a favor y un voto en contra, de los ciudadanos Diputados presentes.

A continuación, y de nueva cuenta hace uso de la voz el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, para presentar a nombre propio y en representación de la Federación de Acción Nacional, la Iniciativa de Acuerdo Parlamentario MORENA, Iniciativa por la que se reforma el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Aprobado mediante Decreto Número 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014; estableciéndose en los siguientes términos:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA

EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA GE
NECCIÓN DE TRAMITI
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU



DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 112

DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pueblo de Baja California acudió a las urnas confirmando su vocación democrática y su convicción que sólo por las vías pacíficas, institucionales y libres se podrá establecer un sistema de gobierno viable, legítimo y con sustento en el interés colectivo de un estado que construye un destino diferente y está empeñado en acabar con la injusticia social, con la incertidumbre y con los obstáculos que impiden el progreso.

Abegados a derecho, atendiendo el mandato constitucional y, sobre todo, salvaguardando el derecho y la libertad de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, nuestro estado ha realizado un proceso electoral ejemplar, un proceso electoral donde todos los ciudadanos votaron y eligieron un gobierno que permita transitar al futuro, a la justicia y equidad.

DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES D
CIONALIDAD

Son los procesos democráticos los que legitiman una sociedad y un gobierno empeñados en transformar su realidad por un futuro más digno y más justo. Esto parte de la vocación primaria de nuestro pueblo por construir una entidad fuerte, unida y comprometida.

Nadie puede atentar contra esta aspiración legítima del pueblo de Baja California. Nadie puede ir contra una decisión soberana de romper ataduras que condenan a

SIN

TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
RECCION DE TRAMITI
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUT



los pueblos a vivir en la pobreza, en la injusticia y en la marginación. Es una obligación ver hacia adelante, abrir las puertas de la justicia y establecer las condiciones sociales, democráticas y legales para que el sueño colectivo de dignificación social sea una realidad.

Baja California es hoy una convocatoria social y un reto colectivo. No hay espacio para las exclusiones, no hay tiempo para los debates estériles, no hay motivos para detener la marcha de nuestra historia como pueblo dedicado al trabajo y a la transformación.

El futuro se construye mirando y trabajando hacia adelante, retomando la grandeza de nuestro pasado y estando a la altura de las exigencias y aspiraciones de la sociedad actual y de las nuevas generaciones. Este es el único objetivo que como sociedad y como pueblo organizado nos debe convocar. El llamado es a la suma, es poner por delante el interés superior de los habitantes de este Estado generoso y noble.

EL MEXICANO
E LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
IERAL DE ACUERDO
DE CONTRAVERSIA
Y DE ACCIONES D
IONALIDAD

Mirando hacia adelante y hacia el futuro que estamos obligados a crear, no se puede pensar en tiempos cortados, en procesos políticos inacabados, en truncar un proyecto que debe ser de largo alcance, con los espacios necesarios y adecuados para hacer posible las acciones públicas que benefician a todos.

Pensar en grande, imaginar en conjunto, luchar unidos, trabajar en un solo frente, es una tarea fundamental. También es inexcusable enfrentar la difícil situación económica que enfrenta nuestro estado. Dilapidar los recursos del estado,

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONALE
— INCOSTITUI



malgastarlo, no está permitido ni es recomendable en esta situación de emergencia

financiera.

El compromiso colectivo es trabajar para ser más eficaces y para ser más firmes en los actos públicos, en las acciones institucionales y en todos los procesos de construcción de una sociedad más equitativa. Solo será posible si se establece un gran acuerdo político que trascienda colores y militancias, porque en esta hora de Baja California no caben los disensos sustentados en las visiones parciales de corto plazo.

Baja California actualmente se enfrenta al mayor endeudamiento público de su historia y lo único que hace frente a este endeudamiento es sin lugar a dudas el arrojo de los bajacalifornianos por impulsar la economía de la entidad y esto se

puede palpar en su producto interno bruto cuya media según datos del INEGI es del 13.9%, esto es el resultado del trabajo y esfuerzo de los distintos sectores económicos por generar empleos y mantener viva la inversión en el Estado ya que en el 2018 la

Económicamente Activa (PEA) ascendió a 1,741,615 personas, lo que representó el 62.9% de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, el

97.8% está ocupada y el 2.2% desocupada, en contraposición a estas cifras podemos ver que el gobierno del estado del 100% de sus ingresos según el presupuesto de egresos 2019, tan solo el 10.3% son recursos propios y el 89.7% son participaciones federales.

No se debe seguir escribiendo números rojos en el erario público y en el propio futuro de Baja California, la vida democrática de nuestro Estado, se ha expresado

SIN
TEXTO

H. AYUNT.
DE MEA

SECRET



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUC



mediante la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, este ejercicio democrático ha representado un costo financiero que cada vez ha ido en incremento, y hoy la ciudadanía nos exige hacer reformar la Constitución Política del Estado, ya que ha manifestado en distintos foros, consultas, debates y diversos medios de expresión social, que no es posible que en menos de dos años estemos iniciando un nuevo proceso electoral, que lo único que representará, es un golpe a las finanzas públicas, a las instituciones e indudablemente al desarrollo económico de nuestro Estado, y todo, por no querer escuchar lo que el pueblo demanda. y que es, dejar de dilapidar los recursos públicos en un proceso electoral que no representa beneficio alguno para el pueblo y que solo lo alejará de las urnas.

Estas razones nos obligan hacer una pausa y analizar el impacto financiero procesos electorales contemporáneos han tenido en Baja California.

El año 2007, se celebraron elecciones para el cargo a Gobernador, en dicha elección de acuerdo al presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2007, y publicada en el Periódico Oficial número 54, tomo CXIII de fecha 12 de diciembre de 2006, se destinaron los siguientes recursos:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad de \$13,114,504.00 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California, le correspondió la cantidad de \$202,319,197.00 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2007, donde resulto ganador de la elección el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se sufragó la cantidad de \$215'438,701.00.

SIN
TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUC



Para la elección del año 2013, el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2013, y publicado en el Periódico Oficial número 59, tomo CXIX de fecha 31 de diciembre de 2012, precisa que el recurso que correspondió en materia electoral derivado del proceso fue el siguiente:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California le otorgaron la cantidad de \$19,257,722.54 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le correspondió la cantidad de \$276,373,358.80 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2013, donde resulto ganador de la elección el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, se sufrago la cantidad de \$295'631,081.34 esto es \$80,192,380.34 más que el proceso anterior.

Para el proceso electoral del año 2019, el presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019, y publicado en el Periódico Oficial número 60, tomo CXXV de fecha 31 de diciembre de 2018, en el que se estableció que el recurso destinado a dicho proceso fue el siguiente:

Al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le otorgaron la cantidad de \$19,257,722.54 y al Instituto Estatal Electoral de Baja California le correspondió la cantidad de \$469,654,626.60 entre ambas instituciones el proceso electoral de 2019, donde resulto ganador de la elección el C. Jaime Bonilla Valdez, se sufrago la cantidad total de \$493'903,450.20, esto es \$198,272,368.86, más que el proceso anterior.

SIN TEXTO

H. AYU
DE
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONALES
— INCOSTITUT



En esta elección, el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Baja California en sesión ordinaria el día 02 de mayo de 2019, y con número de decreto 345, otorgó una ampliación de recursos al Instituto Estatal Electoral de Baja California por la cantidad de \$10,047,838.00.

Sumando esta ampliación, el proceso electoral de 2019, tuvo un costo total por la cantidad de \$503'951,288.20 con esto en total de la elección le costo al estado un monto de \$208,320,206.86 que el proceso inmediato anterior.

Tomando en cuenta las cifras anteriores, resulta más que motivado, la exigencia de la ciudadanía respecto a no celebrar elecciones en un periodo tan corto, y es que no se puede seguir pasando por alto el incremento súbito del presupuesto que se ejerce en cada proceso electoral y más aún cuando Baja California es uno de los Estados más endeudados del país, cuando estamos en la época de la austeridad republicana, cuando lo que se necesita es que el recurso público se ejecute en acciones de beneficio tangible para la ciudadanía; por que pensar en celebrar una nueva elección de Gobernador para el año 2021, cuando esto representaría erogar una suma mayor de cientos millones de pesos, lo cual pondría a nuestra Entidad en una situación más precaria, sin que medie una razón real y de beneficio social para los bajacalifornianos, los ciudadanos están cansados de la corrupción y de los gastos excesivos.

Resulta imperante ampliar el periodo de duración del encargo del Gobernador, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ya que de lo contrario no podrían establecerse de forma adecuada, el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes

SIN
TEXTO

H. AYUNTA
DE MEX
SECRET
ESTADOS UNID
PODER JUDICIAL DI
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETA RIA GENI
SECCION DE TIRAMITE I
CONSTITUCIONALES
L INCONSTITUCI

regionales, lo cual indiscutiblemente generaría incertidumbre económica, política y social, aunado al gasto extraordinario que conllevaría llevar a cabo elecciones para gobernador en 2021; consecuencia del corto periodo de duración del cargo de Gobernador del Estado, el cual es de 2 años y 10 meses, de conformidad con lo señalado en el transitorio octavo del decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra Constitución Política Local, elecciones que debido al costo económico, resultarían en un duro golpe a las de por sí maltrechas finanzas públicas del estado, lo cual se reflejaría de manera inevitable en la economía, los servicios públicos y el bienestar integral de los bajacalifornianos.

La ampliación del periodo de duración del encargo para Gobernador del Estado electo a 5 años en lugar de 2 años 10 meses, resulta idóneo, para satisfacer el propósito constitucional de homologar las elecciones estatales con las elecciones federales del proceso electoral 2024, conforme con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base V y 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La voluntad y el sentir de los bajacalifornianos plasmada en esta iniciativa, se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipulados en la fracción segunda del artículo 105, donde se impuso un periodo de 90 días antes de iniciado un proceso para la promulgación y publicación de leyes electorales y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales, esto último denota la viabilidad de reformar el transitorio octavo del Decreto 112, relativo al artículo 44 de nuestra Constitución

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GI
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONALES
INCOSTITU

Política Local y así poder darle a Baja California un Gobierno que en conjunto con el Gobierno Federal lleven un período de gobernabilidad más estable y en benéfico de nuestra entidad.

La presente iniciativa, no es una norma general electoral, pues no tiene injerencia en el régimen normativo de los procesos electorales del Estado, propiamente dicho o en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, pues dicha iniciativa no propone regular aspectos vinculados directa o indirectamente o que deban influir en o con los procesos electorales de una manera o de otra, "como por ejemplo, distritación o redistribución, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, recursos y faltas administrativas, sus sanciones; mucho menos trastoca o infiere en uno de los principios de la materia electoral, respecto a las elecciones, sufragio, candidatos y demás; por lo que la presente iniciativa no impacta en aspectos de los procesos electorales, de los previstos por la Constitución Federal.

Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia numero P. XVI/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente:

NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la

SIN TEXTO

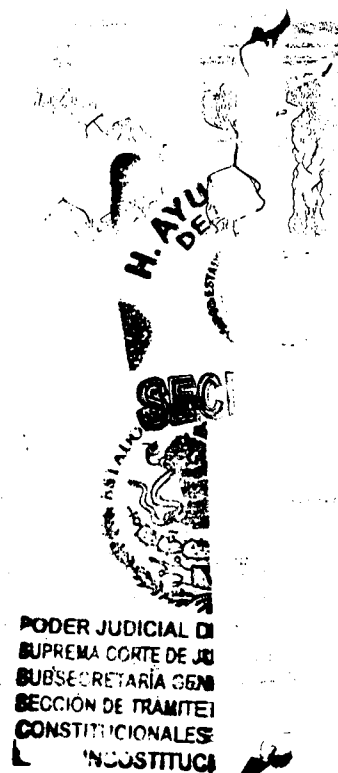
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G
SECCIÓN DE TRÁMIT
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU



tesis de jurisprudencia P./J. 25/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 255, con el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.", sostuvo que las normas electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos o que deban influir en ellos. Ahora bien, de los artículos 41, primer y segundo párrafos, fracciones I y VIII, 116, fracción IV, inciso a) y 122, apartado C, bases primera y segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que ésta prevé principios para la elección de determinados servidores públicos, a saber: los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos), lo que implica que a otros niveles puede prevverse legalmente la elección de ciertos funcionarios, pero los procesos no se rigen por dichos principios, por lo que si una ley establece que la designación de un servidor público diverso a los señalados debe hacerse mediante elecciones, ello no le confiere el carácter de electoral, porque para tener tal calidad es necesario que regule aspectos relativos a los procesos electorales, que son los previstos por la Constitución Federal.

Aunado a lo anterior, es necesario comentar que esta iniciativa no puede considerarse como una modificación fundamental, tomando como referencia uno de

SIN TEXTO





los elementos de procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, el cual se cita a continuación:

"Una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales".

Así, las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos rectores señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante el proceso electoral; por consiguiente, si las modificaciones tienen como única finalidad precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su aspecto formal, la reforma no tendrá el carácter mencionado". (Acción de

inconstitucionalidad 139/2007)

Como se puede apreciar, esta modificación no altera ninguna de las bases, reglas u otro elemento rector de los procesos electorales, pues no se crean obligaciones nuevas, tampoco introduce nuevas reglas, no trastoca el rubro del financiamiento público, ni mucho menos crea, modifica o elimina derechos a quienes pudieran participar, o bien a los partidos políticos participantes, de igual manera esta iniciativa no genera obligaciones de hacer o no hacer a las autoridades electorales, en este sentido es imperante precisar que existen excepciones las cuales han sentado

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA G
SECCION DE TRAMI
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI



precedentes en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de ellas la (Acción de inconstitucionalidad 139/2007) que han sido acompañadas por la opinión de la Sala Superior de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual ya se han realizado modificaciones a leyes electorales en procesos ya iniciados, y que a pesar de haber sido controvertidas, resultaron operantes y pudieron aplicarse a los procesos electorales en turno, siendo esto corroborado al consultar en tesis de jurisprudencias, como la que se cita a continuación:

2/J-98/2006 del siguiente rubro: "CERTeza EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO." Publicada en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, número 1564, se refirió a dichas modificaciones como aquellas que alteran substancialmente disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al

proceso electoral; en este orden, si las citadas modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio o de aplicación contingente, su realización dentro del proceso electoral no producirá su invalidez o, en su caso, la inaplicación al proceso correspondiente.

En este mismo sentido y con la finalidad de nutrir la fundamentación legal de esta iniciativa, en lo referente a los alcances a la expresión "modificaciones legales fundamentales" se cita la siguiente tesis:

SIN TEXTO

H. AYU.
DE
SEC



PODER JUDICIAL E
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GEN
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUC



P./J.87/2007 del siguiente rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" El citado precepto establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte, del procedimiento de creación de dicha norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que, en su caso, las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta resolviera las contiendas antes del inicio del proceso electoral correspondiente, garantizando así el principio de certeza que debe observarse en la materia; sin embargo, la previsión contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede considerarse como tajante, toda vez que no impide la realización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no constituyan "modificaciones legales fundamentales".

Por lo anteriormente expuesto, reformar el Decreto No. 112, publicado en el Periódico Oficial Número 50, Sección I, Tomo CXXI, de fecha 17 de octubre de 2014, es totalmente viable, aunado al hecho de que el Congreso del Estado cuenta con la

SIN
TEXTO





libertad de configuración legislativa, reconocida constitucionalmente, desde esa óptica, la jurisprudencia en materia constitucional ha sido constante, tanto en considerar proscrita la irretroactividad de la ley que irroga perjuicios al gobernado, como en estimar válidas las facultades del legislador para introducir nuevas normas, modificando o derogando las existentes de acuerdo con las necesidades que demande la sociedad.

Con esta iniciativa atendemos al llamado del pueblo bajacaliforniano y al que la propia historia nos convoca por trabajar por la grandeza de Baja California. El futuro nos convoca a sumar esfuerzos y voluntades para ser hijos dignos de este tiempo y es la hora de nuestro pueblo. Baja California tiene destino y ese destino depende de lo que seamos capaces de hacer hoy.

Baja California tiene que construir su futuro con base en actos de ley, con determinación y con conciencia histórica. Nuestro origen y destino es de grandeza.

Estamos llamados a sentar las bases para que esto sea una realidad. Esto es, se debe hoy trabajar para que nada se interponga en el acuerdo conjunto de trascender en el tiempo y en la memoria.

Por las anteriores consideraciones se presenta ante esta Honorable Asamblea, la presente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE

SIN TEXTO

H. AY.
D.

STC



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMITI
CONSTITUCIONALES
L. ... INCONSTITUI



DECRETO NÚMERO 112 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante Decreto 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014, para quedar como sigue:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO AL SÉPTIMO.-

OCTAVO.-OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gubernatura del Estado con el proceso electoral federal de 2024, la Gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024.

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2030. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2030.

NOVENO AL DECIMO NOVENO.- ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

SIN

TEXTO

H. AYDA
SECI



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE D
SUBSECRETARIA
SECCION DE TRAM
CONSTITUCIONA
INCOSTE



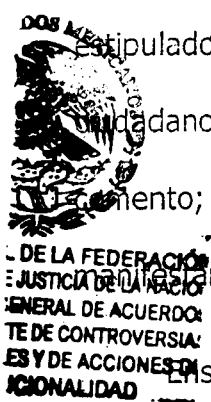
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero.-El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y proveerá el debido cumplimiento al presente Decreto.

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California; a los 08 días del mes de julio del año 2019.

 Víctor Manuel Morán Hernández

Acto seguido, el Diputado Presidente, en base a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso, declara abierto el debate de la Iniciativa presentada por el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a los ciudadanos Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra de la iniciativa en el momento; en donde interviene el Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, para manifestarse en contra de la misma.

 Enseguida y no existiendo ningún otro orador ni a favor, ni en contra, el Diputado Presidente solicita al Director de Procesos Parlamentarios, proceda a distribuir las cédulas de votación a los ciudadanos Diputados; asimismo solicita a la Diputada Secretaria, llamar por orden alfabético a los ciudadanos Diputados, para que emitan su voto en el ánfora: "Agatón Muñiz Claudia Josefina, Arango Pérez José Félix, Arregui Ibarra Alejandro, Bentley Duarte Victoria, Casas del Real José Antonio, Castañeda Pomposo Raúl, Corona Bolaños Cacho Marco Antonio, García Dworak

SIN TEXTO

SEPTIEMBRE



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
MEXICO



Ignacio, Gómez Macías Edgar Benjamín, Hernández Álvarez Mónica, López Gorosave
Rocío, Morán Hernández Víctor Manuel, Montoya Gaxiola Job, Osuna Millán Miguel
Antonio, Padilla Muñoz Bernardo, Peñaloza Valdez Alfa, Ríos López Blanca Patricia,
Tolento Hernández Sergio, Torres Torres Carlos Alberto, Vaca Chacón María
Trinidad, Vázquez Aguiar Iraís María y Zavala Márquez Catalino.

Posteriormente el Diputado Presidente, solicita al Diputado Secretario
Escrutador, llevar a cabo el conteo de las cédulas de votación, resultando 21 votos
a favor y 1 voto nulo.

Enseguida el Diputado Presidente, procede a declarar aprobada la Iniciativa
presentada por el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández. Dado en el Salón de
Sesiones "Lic. Benito Juárez García, en Sesión Extraordinaria de la Vigésima Segunda
Legislatura, a los 8 días del mes de julio del año 2019.



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
E DE CONTROVERSIA
SY DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD

La suscrita **Diputada Iraís María Vázquez Aguiar**, Secretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

CERTIFICA:

Que el presente documento integrado por diecinueve (19) fojas útiles por un solo lado, es copia fiel y exacta del original que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde al extracto del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de julio de 2019. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los ocho días del mes de julio del año dos mil diecinueve. - Doy fe. -----

DIP. DIPUTADA IRAÍS MARÍA VÁZQUEZ AGUIAR
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

H. AYUN-
DE M.
ESTADOS

SECF



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA G
SECCION DE TRAM
CONSTITUCIONA
INCOSTIT.

EL SUSCRITO, CARLOS FLORES VASQUEZ, SECRETARIO DEL 22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI; CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 40, FRACCIÓN XVI, DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

CERTIFICA

QUE EL DOCUMENTO CONSTANTE DE TREINTA (30) FOJAS ÚTILES, ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL EJEMPLAR ORIGINAL, QUE OBRA EN ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CABILDO DE LA SECRETARIA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

SE EXTIENDE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 19 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

CARLOS FLORES VASQUEZ
SECRETARIO DEL 22 AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA



LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ERAL DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
JUSSECRETARIA
CCION DE TRAM
CONSTITUCIONAL
INCOSTIT



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

ACTOR: MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta a la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa** y al **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, integrantes de la **Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, con el expediente de la controversia al rubro indicada, formado con la promoción respectiva y promovida por Blanca Irene Villaseñor Pimienta, quien se ostenta como Síndico Procurador del Municipio de Mexicali, Baja California, registrada con el número **27078**. Conste.

Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

Conforme a los artículos 56¹ y 58² del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Receso que suscribe acuerda:

La Ministra y el Ministro que suscriben, integrantes de la Comisión de Receso designada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de asuntos urgentes, determina que una vez que dé inicio el segundo período de sesiones, correspondiente al año dos mil diecinueve, se envíen los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal para que se provea lo relativo al turno de este asunto; sin embargo, durante el período de receso en que se actúa se proveerá lo conducente al trámite que resulte necesario.

En atención a lo anterior, agréguense al expediente correspondiente, el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como Síndico Procurador del Municipio de Mexicali, Baja California; mediante los cuales intenta promover

¹Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 56. Entre los períodos de sesiones a que se refiere el artículo 3o. de la Ley Orgánica, funcionará una Comisión de Receso integrada por dos o más Ministros nombrados por el Presidente, previo acuerdo del Pleno.

Dicha Comisión dictará los acuerdos relativos a los asuntos jurisdiccionales cuya instrucción corresponda a la Suprema Corte y proveerá los trámites administrativos de carácter urgente. La actuación será colegiada, pero si por cualquier eventualidad faltare alguno de sus miembros, el o los presentes podrán actuar válidamente.

Las decisiones de la Comisión, actuando colegiadamente, se adoptarán por mayoría de votos y en caso de empate tendrá voto de calidad el Ministro con mayor antigüedad en el orden de su designación, salvo que el Presidente de este Alto Tribunal integre dicha Comisión, en cuyo caso a éste corresponderá el voto de calidad.

El Ministro que disienta de alguna determinación podrá solicitar que los motivos de ello se hagan constar en el acta respectiva, así como formular voto particular.

²Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 58. La Comisión de Receso tendrá las siguientes atribuciones en materia jurisdiccional:

I. Las que corresponden al Presidente, en términos de lo establecido en el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica, en relación con los asuntos previstos en las fracciones I y X del artículo 10 de ese mismo ordenamiento, y

II. Las que corresponden al Ministro instructor en controversias constitucionales, en acciones de inconstitucionalidad, en juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, en términos de lo previsto en los artículos 10, fracción X, de la Ley Orgánica y 14, 25, 26 y 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En los supuestos anteriores, cuando hubiere causa urgente que lo exija, la Comisión podrá habilitar días y horas inhábiles, expresando cuál sea aquélla, en términos de lo previsto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente conforme a lo establecido en el artículo 1o. de la referida Ley Reglamentaria.

controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la entidad, de los que se advierte, en principio, que pretende impugnar por esta vía:

“La dispensa de tramite (sic) aprobada por la XXII Legislatura de Baja California, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de julio de 2019, de la iniciativa de decreto por la que se pretende reformar el Artículo Octavo Transitorio del decreto número 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, parte integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con la consecuencia de omitir convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a la Comisión de Dictaminación (sic) para que se participara con voz, para presentar observaciones y alegatos, en los trabajos deliberativos de la misma y teniendo perjuicio tanto en los interés (sic) de la autoridad que represento, como en los derechos de los habitantes que representa el municipio respecto de la iniciativa en comento, transgrediendo el estado de derecho. Acto ilegal del cual se tuvo conocimiento, mediante oficio No. 015794, de fecha 08 de julio de 2019, emitido por la Presidencia y Secretaria (sic) del Congreso del Estado, dirigido a Gustavo Sanchez (sic) Vasquez (sic), en su carácter de Presidente Municipal del H. XXII Ayuntamiento de Mexicali.”

...

Siendo la materia de impugnación en la presente controversia constitucional la omisión, derivada de la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, de convocar al Ayuntamiento de Mexicali a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, pues como se expondrá más adelante, la XXII Legislatura demandada tenía la obligación de celebrar la Comisión de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio y convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, cuando menos cinco días de anticipación a la fecha de la Sesión, a efecto de que concurran al desahogo de las sesiones si lo estiman conveniente, así como también tenía la obligación de substanciar el proceso legislativo en las fases subsiguientes a dicha dictaminación.”



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
SUBSECRETARÍA DE
LEGISLACIÓN
SECCIÓN DE TRANSICIÓN
CONSTITUCIONAL
INCOSTIT.

Al respecto, se tiene por presentada a la Síndica Municipal de Mexicali, Baja California, con la personalidad que ostenta³, designando **delegados**, señalando **domicilio** para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; esto, con fundamento en los artículos 11, párrafos primero y segundo⁴, de la Ley Reglamentaria de las

³ De conformidad con las documentales que exhibe para tal efecto y en términos del artículo 8, fracción I, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, que establece:

Artículo 8. Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, y vigilar que no se afecten los intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:

I.- Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales, así como en las negociaciones relativas a la hacienda municipal, pudiendo nombrar apoderado legal y delegar sus facultades, con arreglo a las que específicamente el Ayuntamiento le delegue; [...]

⁴Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal

Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305⁵ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1⁶ de la citada ley reglamentaria.

Por otra parte, a efecto de proveer lo que en derecho procede respecto del trámite de la demanda promovida, se arriba a la conclusión de que debe desecharse, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25⁷ de la ley reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para desechar de plano un medio de control constitucional como el que ahora se analiza, si advierte que en él se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se cita enseguida:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."⁸

Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

⁵Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo 305 del. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

⁶Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal

Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del código federal de procedimientos civiles.

⁷Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal

Artículo 25. El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

⁸**Tesis P.J. 128/2001.** Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188643.

anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

En la especie, de la simple lectura de la demanda y sus anexos, es posible advertir que **se actualiza la causa de improcedencia** prevista en el artículo 19, fracción VI⁹, de la referida ley reglamentaria, en virtud de que el acto impugnado se emitió dentro de un procedimiento que no ha concluido.

Esto es así, porque de la lectura integral del escrito inicial de demanda y sus anexos, se desprende que lo pretendido por la promovente es impugnar el proceso legislativo, particularmente: “[...] **la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, de convocar al Ayuntamiento de Mexicali a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112...**”.

Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que del principio de definitividad que rige para la impugnación de actos en controversias constitucionales, se pueden desprender los siguientes supuestos:

1. Que esté prevista legalmente una vía en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, que no se haya agotado y a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado y, por tanto, sea apta para la solución del propio conflicto.
2. Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, por la cual pudiera modificarse o nulificarse el acto controvertido a través de aquélla; y,
3. Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento, **que** no ha concluido, esto es, que esté pendiente de dictarse la resolución definitiva que pueda ser impugnada en controversia constitucional, en el que la cuestión debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional

Por tanto, se advierte que la materia de impugnación en el presente medio de control constitucional constituye un acto del procedimiento legislativo para las adiciones y reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California; por lo que dicho acto se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento, de tal forma que, su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye tal procedimiento con la declaratoria correspondiente, pues es hasta ese momento cuando los actos que lo integran adquieren definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto.

⁹Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...).

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; (...).



Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en la que se establece lo siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*"Artículo 33. Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y **Promulgadas por el Ejecutivo**, salvo lo previsto en el artículo 34¹⁰ de esta Constitución. Si la ley no fija el día en que deba comenzar a observarse, será obligatoria en todo el Estado tres días después de la fecha de su **publicación en el Periódico Oficial del Estado**". (Énfasis añadido)*

En relación con lo anterior, resulta relevante tener presente que, como se precisó en párrafos precedentes, la parte actora impugna exclusivamente un acto que forma parte del procedimiento legislativo, de tal suerte que la impugnación no la hace derivar de la publicación de la norma general, sino de un acto dentro del referido procedimiento.

Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es impugnabile cada acto legislativo en lo individual, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general.

En efecto, los actos que integran el procedimiento legislativo están plenamente vinculados entre sí y forman una unidad en su conjunto, que

¹⁰ Constitución Política del Estado de Baja California

Artículo 34. Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo. Si se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo dispondrá de diez días para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.

B. El proyecto de decreto o de ley al que se hubieren hecho observaciones, será promulgado y publicado si el Congreso en un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a que reciba las observaciones, vuelve a aprobarlo por dos tercios del número total de sus miembros. Vencido este plazo, se tendrá por no ratificado el proyecto de que se trate.

Los proyectos de decreto o de ley que hubieren sido objetados por el Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan sido ratificados por el Congreso en el plazo indicado en el párrafo anterior, deberán ser promulgados y publicados en un término que no exceda de cinco días, contados a partir de la fecha en que hayan sido remitidos nuevamente al Ejecutivo.

C. Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario del Congreso, en un plazo máximo de diez días a su aprobación. En un plazo similar, se deberán remitir a los Ayuntamientos, las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, que haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de Diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta Constitución. Las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionados por el Ejecutivo deberán ser promulgados y publicados en el Periódico Oficial del Estado.

D. Si los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, no fijan el día en que deben comenzar a observarse, serán obligatorias tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

E. Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto las de índole tributario o fiscal, podrán ser sometidas a Referéndum, conforme lo disponga la Ley.

F. Los asuntos que sean materia de acuerdo, se sujetarán a los trámites que fije la Ley.

G. El Gobernador del Estado no podrá hacer observaciones sobre los decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso, los emitidos por éste cuando actúe en funciones de Jurado de Sentencia y las reformas constitucionales aprobadas en los términos del artículo 112 de esta Constitución.

H. El Congreso del Estado tendrá facultades plenas para expedir, reformar, adicionar o abrogar la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. Esta Ley o las reformas a la misma no podrán ser sujetas a observaciones, ni necesitarán de sanción, promulgación y publicación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia.

solamente adquieren definitividad al momento de la publicación de la norma general que ha sido objeto de dicho procedimiento; así, la impugnación de los actos que lo integran sólo puede realizarse a partir de que la norma general emanada de tal procedimiento es publicada, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.

En congruencia con lo anterior, la **“indebida dispensa de trámite”** en el sentido de convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a la **“Comisión de Dictaminación”** para que participara con voz en los trabajos legislativos relacionados con la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, con la consecuencia de no convocarlo a los trabajos deliberativos de la misma, no es susceptible de impugnación a través de una controversia constitucional, ya que para poder impugnar ese acto es requisito indispensable que la norma general haya sido publicada, lo que encuentra sustento en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros y texto se citan a continuación:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de actos en vía de controversia constitucional sólo puede llevarse a cabo dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él. En congruencia con lo anterior, si en la demanda de controversia constitucional sólo se impugnan actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general que no ha sido publicada, es claro que debe desecharse al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 25 de la ley citada, ya que para poder impugnar tales actos, es requisito indispensable que dicha norma esté publicada, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.”¹¹



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRÁMITES
CONSTITUCIONALES
INSTITUTO

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL. Si se toma en consideración, por un lado, que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general, y por otro, que tratándose de controversias constitucionales, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la impugnación de actos en esa vía puede llevarse a cabo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido

¹¹Tesis jurisprudencial P.J. 130/2001, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188642.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él, resulta inconcuso que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.”¹²

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO. Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su promulgación y publicación porque es hasta ese momento cuando adquiere definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria citada y, por tanto, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación.”¹³



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
IERAL DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIA
Y DE ACCIONES D
ONALIDAD

Con lo anterior, a esta Comisión no pasa inadvertido lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 36/2012 y de donde se desprende la tesis de rubro **PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**,¹⁴ citada por el Municipio actor en su escrito inicial. En el recurso en cita, se planteó la pregunta constitucional consistente en saber si procedía la suspensión en contra de la promulgación de un decreto por el que se expedía una norma jurídica, si se alegaba una violación al derecho de veto del Ejecutivo Federal, previsto por el artículo 72 constitucional. En ese contexto, se sostuvo que, tratándose de una controversia constitucional, era posible atacar los actos concretos que integran las fases del procedimiento legislativo, especificando textualmente que esto ocurría “siempre que lo hagan los poderes legitimados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éstos aleguen una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado”.

En el caso que nos ocupa, es posible extraer que, contrario a lo resuelto en el precedente en cita, no estamos frente a una transgresión del ámbito competencial que el Municipio tiene constitucionalmente asignado, pues, en ese

¹² Tesis jurisprudencial P./J. 129/2001, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 804, registro 188640.

¹³ Tesis jurisprudencial P./J. 67/2003, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, página 433, registro 182866.

¹⁴ Tesis 1ª. CCLXVIII/2012., Aislada, Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 580, registro 2002365.

sentido, de una lectura de su demanda no se extrae una violación a su esfera de atribuciones. Si bien el actor pretende anclar sus competencias en la materia del artículo 115, fracción I y fracción III, inciso i), lo cierto es que esta Comisión no encuentra una atribución, equiparable al derecho de veto que corresponde al Ejecutivo Federal en virtud del artículo 72, apartado A y B constitucional, dentro de las funciones y servicios públicos a cargo del orden municipal.

Así las cosas, de la simple lectura de los elementos con que se cuenta en el expediente se advierte que el municipio promovente combate un acto no susceptible de impugnación a través de la controversia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, por lo que lo conducente es desechar la presente demanda de este medio de control constitucional.

Esta conclusión encuentra apoyo en la tesis que a continuación se señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. Si de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia constitucional y que, por sus propios caracteres, no son desvirtuables con su tramitación pues nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar esas consecuencias, aquélla debe considerarse notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla de plano."¹⁵

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se acuerda:

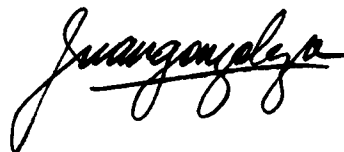
PRIMERO. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de Mexicali, Estado de Baja California.

SEGUNDO. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282¹⁶ del invocado código federal, se habilitan los días que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído.

Notifíquese.

Lo proveyeron y firman conjuntamente la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa** y el **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, integrantes de la **Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, quienes actúan con **Mónica Fernanda Estevané Núñez**, Secretaria de la Comisión que da fe.



¹⁵Tesis P. LXXI/2004, Aislada, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 1722, registro 179954.

¹⁶Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo 282. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

Esta hoja corresponde a la notificación por lista del proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, dictado por los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carranca, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, en la **controversia constitucional 271/2019**, publicado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Conste.

24 JUL 2019	NOTIFICADO POR LISTA A LOS
INTERESADOS, EN VIRTUD DEL PRESENTE ANTECEDENTE, CONSTE.	
SIENDO LAS FECHAS ANTES INDICADAS EN LA FECHA ANTES INDICADA Y EN	
VIRTUD DEL PRESENTE ANTECEDENTE, SE TIENE	
POR HECHA LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.	



LA FEDERACIÓN
CORTA DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDO
CONTROVERSIA
DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GI
SECCION DE TRAM
CONSTITUCIONAL
H. COSTEFU



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019
ACTOR: MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

OFICIO 5646/2019 MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

En el expediente citado al rubro, la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa** y el **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, dictaron un acuerdo que es del tenor literal siguiente:

“Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

Conforme a los artículos 56¹ y 58² del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Receso que suscribe acuerda:

La Ministra y el Ministro que suscriben, integrantes de la Comisión de Receso designada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de asuntos urgentes, determina que una vez que dé inicio el segundo período de sesiones, correspondiente al año dos mil diecinueve, se envíen los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal para que se provea lo relativo al turno de este asunto; sin embargo, durante el período de receso en que se actúa se proveerá lo conducente al trámite que resulte necesario.

En atención a lo anterior, agréguense al expediente correspondiente, el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como Síndico Procurador del Municipio de Mexicali, Baja California; mediante los cuales intenta promover controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la entidad, de los

¹Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 56. Entre los períodos de sesiones a que se refiere el artículo 3o. de la Ley Orgánica, funcionará una Comisión de Receso integrada por dos o más Ministros nombrados por el Presidente, previo acuerdo del Pleno. Dicha Comisión dictará los acuerdos relativos a los asuntos jurisdiccionales cuya instrucción corresponda a la Suprema Corte y proveerá los trámites administrativos de carácter urgente. La actuación será colegiada, pero si por cualquier eventualidad faltare alguno de sus miembros, el o los presentes podrán actuar válidamente. Las decisiones de la Comisión, actuando colegiadamente, se adoptarán por mayoría de votos, en caso de empate tendrá voto de calidad el Ministro con mayor antigüedad en el orden de su designación, salvo que el Presidente de este Alto Tribunal integre dicha Comisión, en cuyo caso a éste corresponderá el voto de calidad. El Ministro que disienta de alguna determinación podrá solicitar que los motivos de ello se hagan constar en el acta respectiva, así como formular voto particular.

²Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 58. La Comisión de Receso tendrá las siguientes atribuciones en materia jurisdiccional:

- I. Las que corresponden al Presidente, en términos de lo establecido en el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica, en relación con los asuntos previstos en las fracciones I y X del artículo 10 de ese mismo ordenamiento, y
- II. Las que corresponden al Ministro instructor en controversias constitucionales, en acciones de inconstitucionalidad, en juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, en términos de lo previsto en los artículos 10, fracción X, de la Ley Orgánica y 14, 25, 26 y 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En los supuestos anteriores, cuando hubiere causa urgente que lo exija, la Comisión podrá habilitar días y horas inhábiles, expresando cuál sea aquélla, en términos de lo previsto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente conforme a lo establecido en el artículo 1o. de la referida Ley Reglamentaria.

que se advierte, en principio, que pretende impugnar por esta vía:

'La dispensa de tramite (sic) aprobada por la XXII Legislatura de Baja California, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de julio de 2019, de la iniciativa de decreto por la que se pretende reformar el Artículo Octavo Transitorio del decreto número 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, parte integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con la consecuencia de omitir convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a la Comisión de Dictaminación (sic) para que se participara con voz, para presentar observaciones y alegatos, en los trabajos deliberativos de la misma y teniendo perjuicio tanto en los interés (sic) de la autoridad que represento, como en los derechos de los habitantes que representa el municipio respecto de la iniciativa en comento, transgrediendo el estado de derecho. Acto ilegal del cual se tuvo conocimiento, mediante oficio No. 015794, de fecha 08 de julio de 2019, emitido por la Presidencia y Secretaría (sic) del Congreso del Estado, dirigido a Gustavo Sanchez (sic) Vasquez (sic), en su carácter de Presidente Municipal del H. XXII Ayuntamiento de Mexicali.'

...

Siendo la materia de impugnación en la presente controversia constitucional **la omisión**, derivada de la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, **de convocar al Ayuntamiento de Mexicali a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos** que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, pues como se expondrá más adelante, la XXII Legislatura demandada tenía la obligación de celebrar la Comisión de dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio y convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, cuando menos cinco días de anticipación a la fecha de la Sesión, a efecto de que concurren al desahogo de las sesiones si lo estiman conveniente, así como también tenía la obligación de substanciar el proceso legislativo en las fases subsiguientes a dicha dictaminación.'

Al respecto, se tiene por presentada a la Síndica Municipal de Mexicali, Baja California, con la personalidad que ostenta³, designando **delegados**, señalando **domicilio** para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; esto con fundamento en los artículos 11, párrafos primero y segundo⁴, de la Ley Reglamentaria de las

³ De conformidad con las documentales que exhibe para tal efecto y en términos del artículo 8, fracción I, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, que establece:

Artículo 8. Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, y vigilar que no se afecten los intereses de los habitantes del municipio, en el ejercicio de las funciones y atribuciones de orden municipal, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:

I.- Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales, así como en las negociaciones relativas a la hacienda municipal, pudiendo nombrar apoderado legal y delegar sus facultades, con arreglo a las que específicamente el Ayuntamiento le delegue; [...]

⁴ **Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurren a las



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305⁵ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1⁶ de la citada ley reglamentaria.

Por otra parte, a efecto de proveer lo que en derecho procede respecto del trámite de la demanda promovida, se arriba a la conclusión de que debe desecharse, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25⁷ de la ley reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para desechar de plano un medio de control constitucional como el que ahora se analiza, si advierte que en él se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se cita enseguida:

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.⁸

Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; en tanto que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

5Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo 305 del. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a una persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

6Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal

Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del código federal de procedimientos civiles.

7Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal

Artículo 25. El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

8Tesis P/J. 128/2001. Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188643.

En la especie, de la simple lectura de la demanda y sus anexos, es posible advertir que **se actualiza la causa de improcedencia** prevista en el artículo 19, fracción VI⁹, de la referida ley reglamentaria, en virtud de que el acto impugnado se emitió dentro de un procedimiento que no ha concluido.

Esto es así, porque de la lectura integral del escrito inicial de demanda y sus anexos, se desprende que lo pretendido por la promovente es impugnar el proceso legislativo, particularmente: **'[...] la indebida dispensa de trámite aprobada del Congreso, de convocar al Ayuntamiento de Mexicali a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112...'**

Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que del principio de definitividad que rige para la impugnación de actos en controversias constitucionales, se pueden desprender los siguientes supuestos:

1. Que esté prevista legalmente una vía en contra del acto impugnado en la controversia constitucional, que no se haya agotado y a través de la cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado y, por tanto, sea apta para la solución del propio conflicto.
2. Que habiéndose interpuesto dicha vía o medio legal, aún no se haya dictado la resolución correspondiente, por la cual pudiera modificarse o nulificarse el acto controvertido a través de aquélla; y,
3. Que el acto impugnado se haya emitido dentro de un procedimiento, que no ha concluido, esto es, que esté pendiente de dictarse la resolución definitiva que pueda ser impugnada en controversia constitucional, en el que la cuestión debatida constituya la materia propia de la controversia constitucional

Por tanto, se advierte que la materia de impugnación en el presente medio de control constitucional constituye un acto del procedimiento legislativo para las adiciones y reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California, por lo que dicho acto se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento, de tal forma que, su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye tal procedimiento con la declaratoria correspondiente, pues es hasta ese momento cuando los actos que lo integran adquieren definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto.

Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en la que se establece lo siguiente:

'Artículo 33. Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y Promulgadas por el Ejecutivo, salvo lo previsto en el artículo 34¹⁰ de esta Constitución.

⁹**Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal**

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...).

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.

¹⁰**Constitución Política del Estado de Baja California**

Artículo 34. Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo.

A. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo dispondrá de diez días para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.

B. El proyecto de decreto o de ley al que se hubieren hecho observaciones, será promulgado y publicado si el Congreso en un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a que reciba las observaciones, vuelve a aprobarlo por dos tercios del número total de sus miembros. Vencido este plazo, se tendrá por no ratificado el proyecto de que se trate. Los proyectos de decreto o de ley que hubieren sido objetados por el Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan sido ratificados por el Congreso en el plazo indicado en el párrafo anterior, deberán ser promulgados y publicados



AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

Si la ley no fija el día en que deba comenzar a observarse, será obligatoria en todo el Estado tres días después de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. (Énfasis añadido)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En relación con lo anterior, resulta relevante tener presente que, como se precisó en párrafos precedentes, la parte actora impugna exclusivamente un acto que forma parte del procedimiento legislativo, de tal suerte que la impugnación no la hace derivar de la publicación de la norma general, sino de un acto dentro del referido procedimiento.

Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es impugnabile cada acto legislativo en lo individual, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general.

En efecto, los actos que integran el procedimiento legislativo están plenamente vinculados entre sí y forman una unidad en su conjunto, que solamente adquieren definitividad al momento de la publicación de la norma general que ha sido objeto de dicho procedimiento; así, la impugnación de los actos que lo integran sólo puede realizarse a partir de que la norma general emanada de tal procedimiento es publicada, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.

En congruencia con lo anterior, la '**indebida dispensa de trámite**' en el sentido de convocar al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a la '**Comisión de Dictaminación**' para que participara con voz en los trabajos legislativos relacionados con la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, con la consecuencia de no convocarlo a los trabajos deliberativos de la misma, no es susceptible de impugnación a través de una controversia constitucional, ya que para poder impugnar ese acto es requisito indispensable que la norma general haya sido publicada, lo que encuentra sustento en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros y texto se citan a continuación:

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los

en un término que no exceda de cinco días, contados a partir de la fecha en que hayan sido remittedos nuevamente al Ejecutivo.

C. Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario del Congreso, en un plazo máximo de diez días a su aprobación. En un plazo similar, se deberán remitir a los Ayuntamientos, las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, que haya sido aprobada por la mayoría de las dos tercias partes del número total de Diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta Constitución.

Las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionados por el Ejecutivo deberán ser promulgados y publicados en el Periódico Oficial del Estado.

D. Si los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, no fijan el día en que deben comenzar a observarse, serán obligatorias tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

E. Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto las de índole tributario o fiscal, podrán ser sometidas a Referéndum, conforme lo disponga la Ley.

F. Los asuntos que sean materia de acuerdo, se sujetarán a los trámites que fije la Ley.

G. El Gobernador del Estado no podrá hacer observaciones sobre los decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso, los emitidos por éste cuando actúe en funciones de Jurado de Sentencia y las reformas constitucionales aprobadas en los términos del artículo 112 de esta Constitución.

H. El Congreso del Estado tendrá facultades plenas para expedir, reformar, adicionar o abrogar la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. Esta Ley o las reformas a la misma no podrán ser sujetas a observaciones, ni necesitarán de sanción, promulgación y publicación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia.

Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de actos en vía de controversia constitucional sólo puede llevarse a cabo dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él. En congruencia con lo anterior, si en la demanda de controversia constitucional sólo se impugnan actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general que no ha sido publicada, es claro que debe desecharse al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 25 de la ley citada, ya que para poder impugnar tales actos, es requisito indispensable que dicha norma esté publicada, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.¹¹

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.

Si se toma en consideración, por un lado, que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general, y por otro, que tratándose de controversias constitucionales, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la impugnación de actos en esa vía puede llevarse a cabo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él, resulta inconcuso que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.¹²

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO.

Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su promulgación y publicación porque es hasta ese momento

¹¹Tesis jurisprudencial P.J. 130/2001, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, registro 188642.

¹²Tesis jurisprudencial P.J. 129/2001, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 804, registro 188640.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

cuando adquiere definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria citada y, por tanto, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación¹³

Con lo anterior, a esta Comisión no pasa inadvertido lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 36/2012 y de donde se desprendió la tesis de rubro **PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**,¹⁴ citada por el Municipio actor en su escrito inicial. En el recurso en cita, se planteó la pregunta constitucional consistente en saber si procedía la suspensión en contra de la promulgación de un decreto por el que se expedía una norma jurídica, si se alegaba una violación al derecho de veto del Ejecutivo Federal, previsto por el artículo 72 constitucional. En ese contexto, se sostuvo que, tratándose de una controversia constitucional, era posible atacar los actos concretos que integran las fases del procedimiento legislativo, especificando textualmente que esto ocurría 'siempre que lo hagan los poderes legitimados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éstos aleguen una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado'.

En el caso que nos ocupa, es posible extraer que, contrario a lo resuelto en el precedente en cita, no estamos frente a una transgresión del ámbito competencial que el Municipio tiene constitucionalmente asignado, pues, en ese sentido, de una lectura de su demanda no se extrae una violación a su esfera de atribuciones. Si bien el actor pretende anclar sus competencias en la materia del artículo 115, fracción I y fracción III, inciso i), lo cierto es que esta Comisión no encuentra una atribución, equiparable al derecho de veto que corresponde al Ejecutivo Federal en virtud del artículo 72, apartado A y B constitucional, dentro de las funciones y servicios públicos a cargo del orden municipal.

Así las cosas, de la simple lectura de los elementos con que se cuenta en el expediente se advierte que el municipio promovente combate un acto no susceptible de impugnación a través de la controversia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, por lo que lo conducente es desechar la presente demanda de este medio de control constitucional.

Esta conclusión encuentra apoyo en la tesis que a continuación se señala:

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. *Si de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de la controversia constitucional y que, por sus propios caracteres, no son desvirtuables con su tramitación, pues nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar esas consecuencias, aquélla debe considerarse notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla de plano.*¹⁵

¹³ Tesis jurisprudencial P.J. 67/2003, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, página 433, registro 182866.

¹⁴ Tesis 1ª. CCLXVIII/2012., Aislada, Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 580, registro 2002365.

¹⁵ Tesis P. LXXI/2004, Aislada, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 1122, registro 179954.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se acuerda:

PRIMERO. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de Mexicali, Estado de Baja California.

SEGUNDO. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282¹⁶ del invocado código federal, se habilitan los días que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído.

Notifíquese.

Lo proveyeron y firman conjuntamente la **Ministra Yasmín Esquivel Mossa** y el **Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá**, integrantes de la **Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, quienes actúan con **Mónica Fernanda Estevané Núñez**, Secretaria de la Comisión que da fe.”(Rúbricas).

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

Ciudad de México, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.



Mónica Fernanda Estevané Núñez
Secretaria de la Comisión de Receso de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer
período de dos mil diecinueve.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
SECCION DE TRAMITE DE CONTROVERSIA
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

JAE/NAC/AARH

¹⁶ **Código Federal de Procedimientos Civiles**

Artículo 282. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO

79

FORMA A-53

Oficio 5646/2019

**CONTROVERSI A CONSTITUCIONAL
271/2019**

**MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA**

Avenida Paseo de la Reforma número
2620, interior 17-04A, Colonia Lomas
Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, Código Postal 11950.

En la Ciudad de México, a las 17:00 horas con
veinte minutos del veintinueve de
Julio de dos mil diecinueve, el suscrito
Juan José Morgan Lizárraga, Actuario Judicial
adscrito a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, me constituí en el domicilio de la autoridad al rubro citada y, una
vez cerciorado de coincidir nomenclatura de la calle, número y colonia, procedo a
notificar a la autoridad referida el oficio de que se trata.

Anexo entregado: Ninguno.

Persona que recibe, manifiesta llamarse: Benjamín Muñoz Álvarez
del Castillo

Se identifica con Credencial para votar con clave de elector
MZLABN87031309H700

y refiere ser Autorizado

Sello y firma de recibido:

24 de julio de 2019

El Actuario

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMACIA D
SUBSECRETARIA C
REGION DE TRAM
CONSTITUCIONAL
11008117



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSI A CONSTITUCIONAL 271/2019
ACTOR: MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

CERTIFICACIÓN DE PLAZO

En la Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil diecinueve, **Mónica Fernanda Estevané Núñez**, Secretaria de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, **CERTIFICA** que el **plazo de cinco días hábiles** previsto en el artículo 51, fracción I¹ en relación con el 52² de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la impugnación del proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la presente controversia constitucional, transcurrirá del **dos al ocho de agosto de dos mil diecinueve**, conforme al calendario siguiente:



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

JULIO 2019						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		24	25	26	27	28
29	30	31				
AGOSTO 2019						
				1	2	3
4	5	6	7	8		

Esto, toda vez que el proveído se le notificó el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, surtirá efectos el día hábil siguiente, esto es el uno de agosto y comenzará a correr el dos de los mismos mes y año; y de dicho plazo deben descontarse del veinticinco al treinta y uno de julio, así como tres y cuatro de agosto del presente año, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto en el Punto Primero, incisos a), b) y n), del Acuerdo General Plenario **18/2013**³, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

¹ **Artículo 51.** El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones; [...]
² **Artículo 52.** El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas.
³ **PRIMERO.** Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles:
a) Los sábados;
b) Los domingos;
n) Los demás que el Tribunal Pleno determine como inhábiles.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los artículos 2⁴ y 3⁵ de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163⁶ de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La presente certificación se expide en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de referencia, para los efectos legales. Doy fe.



JAE/NAC/AARH

⁴ **Artículo 2.** Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

⁵ **Artículo 3.** Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

II. Se contarán sólo los días hábiles, y

III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁶ **Artículo 163.** En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la Ley.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

ACTOR: MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a uno de agosto de dos mil diecinueve se da cuenta al **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con el estado procesal del expediente. Conste.

Ciudad de México, a uno de agosto de dos mil diecinueve.

Visto el estado procesal del expediente, y dado que los integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, por proveído de veintitres de julio de dos mil diecinueve, desecharon la controversia constitucional **271/2019**, promovida por el Municipio de Mexicali, Baja California, y se reservaron de proveer lo conducente al turno de este asunto, por tanto tórnese por conexidad al **Ministro Javier Laynez Potisek**, para que instruya el procedimiento correspondiente, en virtud de que mediante proveído de Presidencia de esta misma fecha, se le designó con ese carácter en la diversa controversia constitucional **269/2019**, promovida por el Municipio de Tijuana, Baja California, en la que se impugna el mismo Decreto por el que se pretende reformar el artículo octavo Transitorio de la Constitución Política de la entidad.

Esto, con fundamento en los artículos 24¹ de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81² del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¹ **Artículo 24.** Recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará, según el turno que corresponda, a un ministro instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución.

² **Artículo 81.** Los asuntos de la competencia de la Suprema Corte se turnarán por su Presidente entre los demás Ministros, por conducto de la Subsecretaría General, siguiendo rigurosamente el orden de su designación y el cronológico de presentación de cada tipo de expedientes que se encuentren en condiciones de ser enviados a una Ponencia, tanto para formular proyecto de resolución como para instruir el procedimiento.

El Presidente de cada Sala turnará entre sus integrantes, las solicitudes de facultad de atracción presentadas originalmente por parte no legitimada, los recursos de reclamación interpuestos en contra de los acuerdos que emita y los asuntos cuyo proyecto se tenga por desechado en sesión y su retorno se ordene en ésta. Una vez atraído un asunto, se remitirá a la Presidencia de la Suprema Corte para el turno correspondiente entre los Ministros de la Sala respectiva.



2

Todos los asuntos del mismo tipo se registrarán en el libro correspondiente a cada uno de ellos debidamente autorizado por los titulares de los respectivos órganos encargados de los trámites correspondientes.

Quando el Ministro decano dicte acuerdos de turno como presidente en funciones, si conforme al orden le corresponde el conocimiento de un asunto, deberá turnarlo a su Ponencia.

El Secretario General de Acuerdos girará las instrucciones que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento y supervisión del sistema de turnos establecido en este Reglamento Interior.



PROMOVENTE Y RECURRENTE: MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE CALIFORNIA

**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con el escrito de Blanca Irene Villaseñor Pimienta, Síndico Procurador del Municipio de Mexicali, Baja California, recibido el treinta de julio del año en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, y registrado con el número **27360**. Conste.

Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil diecinueve

Con el escrito de cuenta, formese y registre el expediente relativo al recurso de reclamación que hace valer la Síndico Procuradora del Municipio de Mexicali, Baja California, cuya personalidad tiene reconocida en autos de la controversia constitucional citada al rubro, contra el proveído de veintitres de julio del presente año, dictado por la **Ministra, Yasmín Esquivel Mossa**, y el **Ministro Juan Luis González Alcántara Carranca**, integrantes de la Comisión de Heceso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, mediante el cual desecha de plano, por notoriamente infundada, la demanda de controversia constitucional.

Con fundamento en los artículos 10, fracción I¹, 11, párrafo segundo², 51, fracción I³, de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite a trámite el recurso de **reclamación** que hace valer en representación del Municipio de Mexicali, Baja California.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 4, párrafo tercero⁵, y 11, párrafo segundo⁶, de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 61⁷ y 305⁸ del Código Federal de

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO 10. Tendrán el carácter de pautas en las controversias constitucionales:

Artículo 10. Tendrán el carácter de papeletas controversiales constitucionales:

1. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia: (...)

² **Artículo 11.** (...)

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones; (...)

Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas.

⁵ Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4, (...)

Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado.

⁶ **Artículo 11. (...)**

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

⁷ Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo 61. En todo acto de que deba dejarse constancia en autos, intervendrá el secretario, excepción de los encomendados a otros funcionarios.

Artículo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que interpongan, deben designar cuando se ubica en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que las

MODERNO QUE SE APOYAN EN LA INTERPRETACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los jueces deben designar a los jueces que deban ser personales. Igualmente, la elección de jueces de CONSTITUCIONALIDAD que no sean miembros de las acciones de INCONSTITUCIONALIDAD.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO DE LA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019**

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1º de la cita ley, se tienen por designados **autorizados y delegados**, por señalado **domicilio** para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y ofreciendo como **pruebas** la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones exhibidas las documentales que acompaña.

Por otra parte, con apoyo en el artículo 53¹⁰ de la citada ley reglamentaria, **córrase traslado** a las partes con copia del escrito de interposición del recurso, del auto impugnado y de la constancia de notificación respectiva, para que **dentro del plazo de cinco días hábiles**, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga o representación corresponda.

Respeto de esto último, por lo que hace a la **Consejería Jurídica del Gobierno Federal**, la vista es con la finalidad de que, si considera que la materia del presente juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su esfera competencial convenga, de conformidad con el artículo Décimo Séptimo Transitorio¹¹ del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce y con lo determinado por el Pleno de este Alto Tribunal en su sesión privada de once de marzo del año en curso¹².

A efecto de integrar debidamente este expediente, agréguese copia certificada de las constancias que obran en la controversia constitucional **271/2019**, a la cual debe añadirse copia certificada de este proveído para los efectos a que haya lugar.

Por otra parte, toda vez que el acuerdo impugnado en este asunto es substancialmente idéntico al recurrido en el diverso **138/2019-CA**, interpuesto por el Municipio de Tijuana, Baja California, una vez concluido el trámite del recurso, **térnese este expediente por conexidad al Ministro José Fernando Franco González Salas**, quien fue designada como ponente en el referido recurso de reclamación. Lo anterior, de conformidad con los artículos 14, fracción II¹³, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 81, párrafo primero¹⁴, y 88, fracción III¹⁵, del Reglamento Interior de la Federación, 81, párrafo primero¹⁴, y 88, fracción III¹⁵, del Reglamento Interior de la Federación.

interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

⁹ **Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**
Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del código federal de procedimientos civiles.

¹⁰ **Artículo 53.** El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien correrá traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este último plazo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará los autos a un ministro distinto del instructor a fin de que elabore el proyecto de resolución que deba someterse al Tribunal Pleno.

¹¹ **Artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal.** Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto referidas en el Transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma:

I. Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en el inciso i) de la fracción II, del artículo 105 de esta Constitución que se adiciona por virtud de este Decreto, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el Transitorio anterior, deberán remitirse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la dependencia del Ejecutivo Federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno. (...).

¹² Comunicado a esta Sección de Trámite mediante oficio número SGAMFEN/237/2019, de once de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario General de Acuerdos, en los términos siguientes: "Hago de su conocimiento que en sesión privada celebrada el día de hoy, el Tribunal Pleno determinó 'Dar vista en los asuntos relativos a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, en los recursos deducidos de esos expedientes, además de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, tanto a la Fiscalía General de la República como al Consejero Jurídico del Gobierno Federal'."

¹³ **Artículo 14.** Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia: (...)

II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución. (...).

¹⁴ **Artículo 81.** Los asuntos de la competencia de la Suprema Corte se turnarán por su Presidente entre los demás Ministros, por conducto de la Subsecretaría General, siguiendo rigurosamente el orden de su designación y el cronológico de presentación de cada tipo de expedientes que se encuentren en condiciones de ser enviados a una Ponencia, tanto para formular proyecto de resolución como para instruir el procedimiento. (...).

¹⁵ **Artículo 88.** En materia de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad se exceptúan de lo previsto en el artículo 81 de este Reglamento Interior: (...)



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

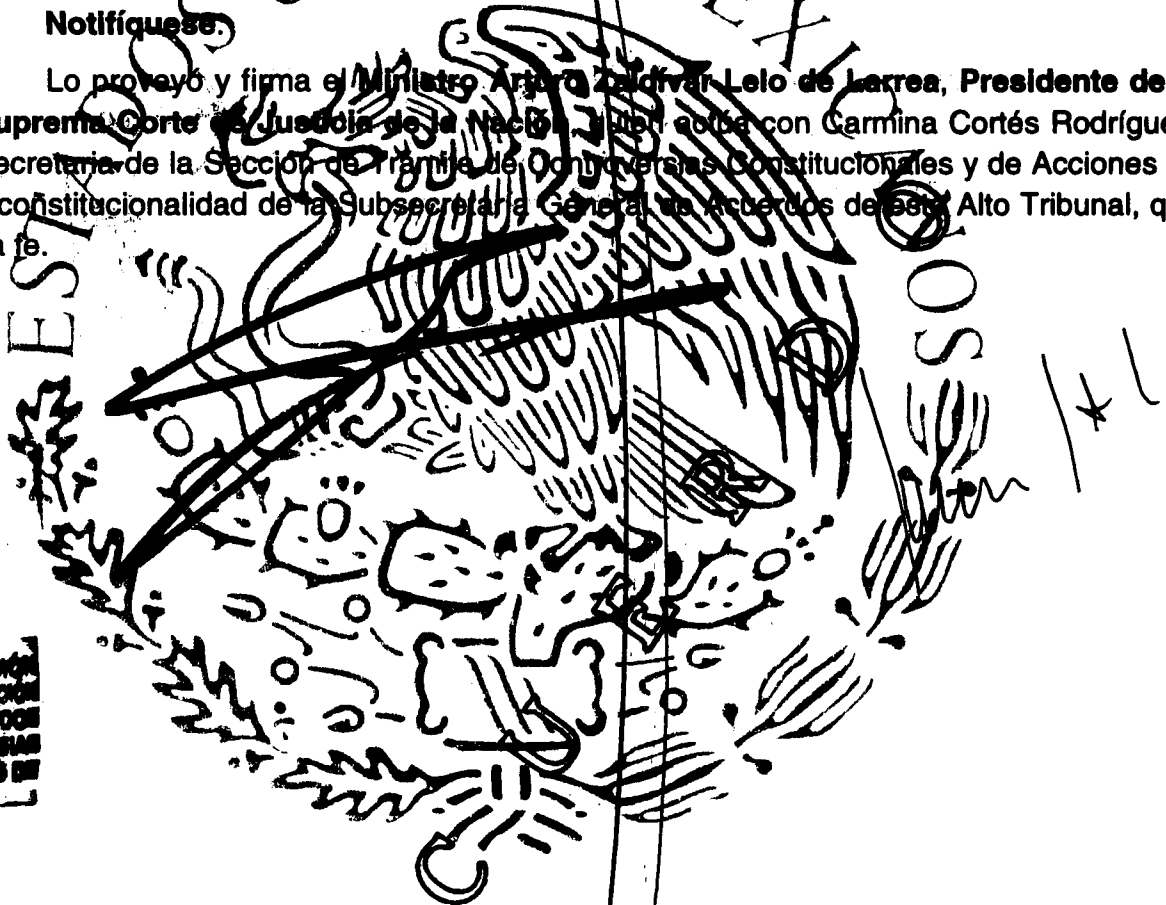
RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO DE LA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

Alto Tribunal, así como lo acordado por el Tribunal Pleno en la sesión privada número 7, de dieciséis de febrero de dos mil doce, en el que se determinó que en el artículo 88, fracción III, del Reglamento Interior citado, quedan comprendidos los recursos de reclamación interpuestos en contra de proveídos dictados en diferentes controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, emitidos por el mismo Ministro instructor y de contenido idéntico.

Finalmente, con fundamento en el artículo 287¹⁶ del invocado Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la certificación de los días en que transcurra el plazo otorgado en este proveído.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el Ministro Arturo Saldivar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Alto Tribunal, que da fe.



Esta copia corresponde al proveído de dos de agosto de dos mil diecinueve dictado por el Ministro Arturo Saldivar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación 139/2019-CA, derivada de la controversia constitucional 271/2019, interpuesta por el Municipio de Mexicali, Baja California. Conste.

EHC/EDBG
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

III. Los recursos de reclamación en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad en los que se impugne el mismo proveído.

Las controversias constitucionales conexas, las acciones de inconstitucionalidad que se deban acumular y los recursos de reclamación antes referidos, se turnarán por el Presidente al Ministro que conozca del asunto original, en la inteligencia de que los asuntos de esa naturaleza que se presenten con posterioridad al que se estimó conexo o que debía acumularse con uno ya en trámite, se turnarán de inmediato al Ministro al que le hubiera correspondido conocer de estos y a los que sigan en el orden correspondiente.

En el caso de impedimentos y recursos de reclamación en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, se seguirán en principio las reglas ordinarias del turno, salvo que le correspondiera al Ministro respecto del cual se hagan valer aquéllos y en cuanto a los que hayan dictado los acuerdos que se impugnan, en cuyo caso el asunto se turnará al siguiente Ministro atendiendo al orden de su designación, sin que proceda compensación alguna, asentándose en el libro respectivo el motivo por el que quedó excluido del turno el Ministro de que se trate.

¹⁶Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 287 En los autos se asentará razón del día en que comienza a correr un término y del en que deba concluir. La constancia deberá asentarse precisamente el día en que surta sus efectos la notificación de la resolución en que se conceda o mande abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del artículo anterior.

La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del omiso.

EL 13 AGO 2019 ; SE NOTIFICO POR LISTA A LOS
INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. CONSTE
SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA, EN
VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS, SE TIENE
POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA, DONDE SE

ESTADOS UNIDOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONAL

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI

Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil diecinueve.-----
Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación,-----

C E R T I F I C A

Que la anterior es copia fiel del acuerdo de dos de agosto del año en curso, dictado
por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el **recurso de reclamación
139/2019-CA, derivado de la controversia constitucional 271/2019**, interpuesto por
el Municipio de Mexicalí, Estado de Baja California; y se expide en dos (2) fojas
útiles, debidamente cotejadas, foliadas, selladas y rubricadas, para ser agregada
a la citada controversia.-----

Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el citado providencia, por el
**Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. CONSTE.**-----

EHC/EAM

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA,
DERIVADO DE LA CONTROVERSI
CONSTITUCIONAL 271/2019
RECURRENTE: MUNICIPIO DE MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA

Vo. Bo.
MINISTRO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación correspondiente al dos de julio de dos
mil diecinueve.

VISTOS; Y
RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la controversia constitucional.

Mediante escrito recibido en este Tribunal Constitucional, el veintidós
de julio de dos mil diecinueve, Blanca Irene Villaseñor Pimienta, en su
carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Baja
California, promovió controversia constitucional contra la Legislatura de
esa entidad por la dispensa de trámite que aprobó en Sesión
Extraordinaria celebrada el ocho de julio de dos mil diecinueve, de la
iniciativa para reformar el artículo octavo transitorio del Decreto 112 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,
con la consecuencia de no convocar al Ayuntamiento de Mexicali a la
Comisión de Dictaminación para que participara con voz, así como para
que presentara observaciones y alegatos, en los trabajos deliberativos
de dicha reforma.

**SEGUNDO. Auto por el que se desechó la controversia
constitucional.** En acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve,
los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara
Carrancá, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil
diecinueve, decretaron el desechamiento de la controversia
constitucional al considerar que se actualizaba un motivo manifiesto e
indudable de improcedencia.

2019 OCT 23 AM 11 15
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONTROVERSIA
CONSTITUCIONALES
Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

SECRETARÍA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL ACIDOS.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSI
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019**

TERCERO. Interposición del recurso de reclamación y trámite. Contra esa determinación, Blanca Irene Villaseñor Pimienta, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa.

Mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el asunto con el expediente 139/2019-CA, lo admitió a trámite, ordenó correr traslado a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y turnó los autos a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Presidente de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de reclamación.¹

SEGUNDO. Procedencia. El recurso de reclamación es procedente.²

TERCERO. Oportunidad. El recurso es oportuno.³

¹ De conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracción V, 21, fracción XI, y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de que el recurso de reclamación no se ubica en los supuestos de los asuntos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Pleno.

² De conformidad con el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se interpuso contra el proveído dictado por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó de plano la controversia constitucional, por considerar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

³ El acuerdo recurrido se notificó por medio de oficio a la parte recurrente el miércoles veinticuatro de julio de dos mil diecinueve y surtió efectos el jueves uno de agosto siguiente (porque del veinticinco al treinta y uno de julio de este año se encontraba transcurriendo el primer periodo de receso de este Tribunal y no deben considerarse en términos de la fracción III del artículo 3º de la Ley Reglamentaria de la materia); de tal manera que el plazo de cinco días para su interposición, previsto en el artículo 52 de la ley reglamentaria de la materia, transcurrió del viernes dos de agosto al jueves ocho del mes y año en cita, del cual se deben descontar el tres y cuatro de agosto de dos mil diecinueve, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto en el Punto Primero, incisos a) y b) del Acuerdo General Plenario 18/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, si el escrito de expresión de agravios fue presentado el martes treinta de julio de dos mil diecinueve en



RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CUARTO. Legitimación. El recurso fue promovido por parte legitimada.⁴

QUINTO. Acuerdo recurrido. En el acuerdo recurrido, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer período de dos mil diecinueve, desecharon la controversia constitucional al considerar que se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Señalaron que de la simple lectura de la demanda y sus anexos, se podía advertir la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, toda vez que el acto impugnado tuvo lugar dentro de un procedimiento que no ha concluido.

En ese sentido, precisaron que el acto cuya invalidez demandaba la accionante se encontraba sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento legislativo, por lo que sólo podría impugnarse una vez que éste haya concluido, pues es hasta ese momento en que los actos que lo integran adquieren definitividad.

Al respecto, se apuntó que es criterio de este Tribunal Constitucional que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de éste, de tal forma que no es impugnable cada acto legislativo en lo individual, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general.

la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su interposición fue oportuna. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 223/2007, de esta Segunda Sala, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU PRESENTACIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA AUNQUE SE INTERPONGA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. Del artículo 103 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo de 3 días para interponer el recurso de reclamación comenzará a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acuerdo recurrido. Ahora bien, el recurso interpuesto antes de que inicie ese plazo no puede considerarse extemporáneo, pues dicho precepto sólo pretende que el aludido medio de defensa no se haga valer después de concluido aquél, pero no impide que pueda presentarse antes de que inicie." Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, pág. 215, registro IUS 170625.

⁴ El recurso fue interpuesto por Blanca Irene Villaseñor Pimienta, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, cuya personalidad tiene reconocida en autos de la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso de reclamación.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019**

SEXTO. Agravios. La parte recurrente formula los agravios siguientes:

- En el acuerdo impugnado se realizaron una serie de consideraciones para desechar la controversia constitucional que conllevan una argumentación relacionada con lo sustantivo del asunto, propia de una sentencia definitiva, por lo que es incorrecto que la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, susceptible de advertirse de la simple lectura de la demanda y sus anexos; de esta manera, se aplicó indebidamente el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional.
- En el acuerdo recurrido se formularon razonamientos en relación con la tesis 1a. CCLXVIII/2012 (10a.), de rubro *"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD"*, en el sentido de que, contrario a lo resuelto en ese asunto, no estamos frente a una transgresión al ámbito competencial del Municipio, pues si bien el Municipio pretende anclar sus competencias en la materia del artículo 115, fracciones I y III, inciso i), de la Constitución, no se advierte una atribución equiparable al derecho de veto del Ejecutivo Federal; sin embargo, la tesis se citó por estimarse aplicable en sustancia al asunto.
- La materia objeto de controversia es una omisión dentro del proceso legislativo, consistente en no convocar al municipio actor a la Comisión de Dictaminación, a participar con voz y ser escuchado en dicha fase del procedimiento, y no el acto de indebida dispensa de trámite de la iniciativa de reforma, como se apunta en el acuerdo recurrido, por lo que la Comisión de receso partió de premisas inexactas, de esa manera, al impugnarse una omisión, la controversia es procedente. En apoyo a su argumento cita la tesis P./J. 43/2003, de rubro *"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN"*.



RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

• No es aplicable la causal de improcedencia indicada en el acuerdo de desechamiento, debido a que no hay medio o recurso legal para modificar, revocar o anular el acto cuya invalidez se solicita.

- Conforme a la tesis aislada emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte, de rubro *"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD."*, no existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en el caso, porque se pueden impugnar actos concretos de las fases del procedimiento legislativo, siempre que lo hagan los entes legitimados por el artículo 105 Constitucional y se alegue una transgresión a la esfera competencial, sin que pueda alegarse falta de definitividad.
- Además, la declaratoria de incorporación a la Constitución del Estado de Baja California de la reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 fue emitida por el Congreso estatal el veintitrés de julio de año en curso, por lo que está superada la cuestión de definitividad que hace valer la Comisión de Receso de esta Suprema Corte en el acuerdo recurrido.
- El acuerdo recurrido es inexacto porque, contrario a lo que señala, la omisión de convocar al Municipio recurrente a la Comisión de Dictaminación en el proceso legislativo en cuestión, sí afecta su ámbito competencial en términos del artículo 30, fracción II, y 82, apartado A, fracción III, de la Constitución local, así como el diverso 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la propia entidad federativa, y así lo señaló en la demanda, por lo que es aplicable al caso la tesis aislada de la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, referida en párrafos precedentes.
- El acuerdo impugnado también soslaya la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro *"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES FACTIBLE SU OTORGAMIENTO CONTRA LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA NORMA"*

LA FEDERACIÓN
IA DE LA NACIÓN
L DE ACUERDOS
CONTROVERSIA
ACCIONES DE
ALIDAD

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019**

*ELECTORAL, CUANDO ESTOS ACTOS NO SE HAN EJECUTADO
Y SE ALEGA, POR EL PODER EJECUTIVO, VIOLACIÓN AL
DERECHO DE VETO.”, la cual resulta orientadora al caso.*

SÉPTIMO. Estudio. Son infundados los agravios expresados por la parte recurrente, los cuales por razón de técnica, serán analizados en orden distinto al planteado por la inconforme.

De la revisión integral del auto impugnado, de la demanda de controversia constitucional y de sus anexos, esta Segunda Sala advierte que, contrario a lo que señala la recurrente, la determinación tomada por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, fue correcta ya que, en el caso, efectivamente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia⁵, en relación con el artículo 25 del propio ordenamiento, por falta de definitividad.

El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia, establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que la referida causal de improcedencia implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales que involucra dos cuestiones específicas:

1. La existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o anulación, caso en que la parte afectada está obligada a agotarlo previamente a esta acción, y
2. La existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, es decir, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad, y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en que el afectado debe esperar hasta la conclusión del

⁵ Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; (...)



RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

procedimiento para estar en aptitud de impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.

Este criterio se sustenta en la tesis jurisprudencial P./J. 12/99, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro **CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.**⁶

En relación con la segunda de las hipótesis señaladas en la invocada tesis, es preciso distinguir entre los supuestos de litispendencia y los de falta de definitividad: los primeros únicamente podrían actualizarse respecto de las controversias que estuvieran promoviéndose ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que no es el caso) y los segundos ante cualquier instancia que tuviera facultades para pronunciarse sobre el litigio del cual podría conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el presente caso resulta relevante la hipótesis relativa a la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, específicamente de un procedimiento legislativo que no ha concluido.

La cuestión que se plantea en este asunto es qué consecuencias normativas se siguen para efectos de la procedencia de una controversia constitucional, cuando se impugnan ciertos "actos" o "elementos"⁷ que forman parte de un procedimiento de creación normativa que se encuentra pendiente de culminación.

⁶ Texto: "La causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones específicas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnación en la controversia y lograr con ello su revocación, modificación o nulificación, caso en el que la parte afectada está obligada a agotar previamente a esta acción; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio." Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, pág. 275, registro IUS 194292.

⁷ Se usa el término "elementos" como una expresión genérica y neutral.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIAS CONSTITUCIONAL 271/2019**

Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, reiteradamente, el criterio de que frente a ese tipo de "elementos", la controversia constitucional es improcedente, ya que se trata de "actos no definitivos" (en sentido lato), como acontece respecto de normas que no hubieren sido publicadas o promulgadas, los dictámenes legislativos o las actuaciones realizadas dentro de los procesos legislativos federales.⁸

Este criterio se advierte de las tesis siguientes:

- P./J. 129/2001, de rubro **"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL."**⁹
- P./J. 67/2003, de rubro **"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO."**¹⁰

⁸ Similares consideraciones se sostuvieron en el recurso de reclamación 73/2011-CA, derivado de la controversia constitucional 103/2011, resuelto por la Segunda Sala en sesión de 18 de enero de 2012, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas (Ponente), Luis María Aguilar Morales y Sergio A. Valls Hernández.

⁹ Texto: "Si se toma en consideración, por un lado, que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general, y por otro, que tratándose de controversias constitucionales, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la impugnación de actos en esa vía puede llevarse a cabo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él, resulta inconcuso que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.", Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, pag. 804, registro IUS 188640.

¹⁰ Texto: "Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presupuesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su promulgación y publicación porque es hasta ese momento cuando adquiere definitividad, constituyendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria citada y, por tanto, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación." Datos de localización: Semanario



RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

▪ P./J. 88/2004, de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO."¹¹

▪ P./J. 79/2005, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA UN ACTO QUE NO ES DEFINITIVO EN EL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL DEL CUAL FORMA PARTE."¹²

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, pág. 433, registro IUS 182866.

LA FEDERACIÓN. Texto: "De los artículos 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87, 94, 95 y 115 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las Comisiones legislativas son órganos internos de las Cámaras del Congreso de la Unión que contribuyen a que éstas cumplan con sus atribuciones constitucionales, para lo cual analizan los asuntos de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resolución, elaborando un dictamen que contendrá una parte expositiva de las razones en que se funde y otra de proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación; asimismo, se observa que realizado el dictamen, el cual debe estar firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión, debe someterse a discusión y una vez discutido se pone a votación y, en caso de aprobación por el Pleno de la Cámara legislativa, se traduce en un punto de acuerdo. Con base en lo anterior, se concluye que el dictamen es uno de los actos que conforman el procedimiento correspondiente y no constituye una resolución definitiva que en sí misma haya puesto fin al asunto, como sí lo es la aprobación que realiza el Pleno, por lo que al impugnarse dicho dictamen en una controversia constitucional, debe sobreseerse en el procedimiento por no constituir aquél un acto definitivo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, pág. 919, registro IUS 180675.

¹² Texto: "De los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para que las reformas y adiciones propuestas en una iniciativa de ley formen parte del orden jurídico nacional es necesario que se agoten todas las etapas contempladas en el proceso legislativo. Ahora bien, si la Cámara Revisora desecha un dictamen sometido a su consideración por la Cámara de Origen para que ésta lo reexamine con base en las observaciones formuladas, es indudable que tal proceso legislativo -incluido el dictamen impugnado- no puede reputarse como definitivo para efectos de la procedencia de la controversia constitucional, pues todavía está pendiente la resolución de la Cámara de Origen, o bien, el resultado del procedimiento previsto en el citado artículo 72, inciso d), de la Constitución Federal y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia." Datos de localización: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, pág. 915, registro IUS 178011.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019**

En la especie, el Municipio actor impugna la omisión del Congreso de Baja California, de convocar al Ayuntamiento de Mexicali, a la Comisión de Dictaminación, para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar en relación con la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio, del Decreto 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Al respecto, en la demanda de controversia constitucional el Municipio actor hizo valer que, a su consideración, la *"(...) Legislatura del Estado de Baja California (...) no cumplió con lo establecido en el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; así también, omitió convocar al Ayuntamiento de Mexicali a Comisión de Dictaminación para que participara con voz en los trabajos legislativos que debían tener lugar con relación a la iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112 de la Constitución del Estado, ello derivado de la indebida dispensa de trámite de dicha iniciativa, violando así gravemente el proceso legislativo y por ende el principio de legalidad y debido proceso (...)".*

Como se advierte, el acto impugnado carece de definitividad por formar parte de un procedimiento que, a la fecha de presentación de la demanda, aún no concluía y que requería agotar las etapas que permitieran arribar a la promulgación y publicación, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.

En relación con la regulación del procedimiento legislativo en el Estado de Baja California, el Capítulo III, denominado *"De la Iniciativa y formación de leyes y decretos"*, de la Constitución Política de dicha entidad federativa, se advierte que las iniciativas de las leyes y decretos deberán sujetarse al Dictamen de Comisiones, discusión y votación y adquirirán el carácter de ley, al ser aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo¹³.

Las comisiones de dictamen legislativo anunciarán al Poder Ejecutivo y a los Ayuntamientos, cuando la iniciativa se relacione con asuntos de carácter municipal, la fecha de sesión en que se discutirá un proyecto para que envíe un representante que, sin voto, tome parte en los trabajos. Por su parte, si el Ejecutivo juzga conveniente hacer

¹³ ARTICULO 33.- Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y Promulgadas por el Ejecutivo, salvo lo previsto en el artículo 34 de esta Constitución.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo.

En ese orden, se establece que las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionadas por el Ejecutivo, deberán ser promulgados y publicados en el Periódico Oficial del Estado.

Acorde a lo anterior, la omisión impugnada en la controversia constitucional, se ubica dentro de un procedimiento legislativo que, a la fecha de la presentación de la demanda, no había culminado, al no haberse promulgado ni publicado el decreto respectivo, por lo que la controversia constitucional es improcedente.

Dicha determinación se robustece si se toma en consideración que, de estimar lo contrario, se daría lugar a que se promoviera la controversia constitucional contra cada uno de los actos que pudieran emitirse dentro de los procedimientos que desnaturalizaría su esencia como vía uniinstancial, y desvirtuaría el carácter de este Tribunal como único facultado para resolver sobre la constitucionalidad de los actos definitivos de las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, constitucional, que pudieran lesionar su esfera de competencia.

Además, si bien la materia de la impugnación en la controversia constitucional se trata de un acto omisivo, lo cierto es que no puede entenderse como un acto aislado, puesto que se suscita dentro de un procedimiento legislativo inconcluso a la fecha de presentación de la demanda; de tal manera que, contrario a lo que señala el recurrente, no le resulta aplicable la tesis P.J. 43/2003, de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN".

Consecuentemente, en el caso sí se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la Materia.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019**

Aunado a lo anterior, contrario a lo planteado por la recurrente, la causa de improcedencia sí es notoria y manifiesta, derivado de que el Pleno de este Tribunal Constitucional ya ha decidido que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo, únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando esos actos adquieren definitividad.

Efectivamente, la existencia de los criterios jurisprudenciales citados en párrafos precedentes, que determinan la improcedencia de la controversia constitucional contra actos del proceso legislativo de una norma que no ha sido publicada, son una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento de la controversia constitucional, pues es inconcuso que si ello ha sido determinado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia de observancia obligatoria en términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,¹⁴ para todos los órganos de menor jerarquía, no hay posibilidad de que dicho obstáculo, declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado.

Es así, porque de conformidad con el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de la materia, cuando las sentencias dictadas en controversias constitucionales sean aprobadas por cuando menos ocho votos, las razones contenidas en los considerandos que funden sus resolutivos serán obligatorias para las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.

De esta manera, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa

¹⁴ "ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales".



RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, obligatoriedad que se extiende a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, debe considerarse que la existencia de criterios jurisprudenciales de este Tribunal, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento.

Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la controversia constitucional, como causa notoria y manifiesta de improcedencia, cuando se impugnan actos del procedimiento legislativo de una norma general que no ha sido publicada, porque al ser criterio de jurisprudencia emitido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales y, en ese sentido, no existe razón lógica para que ésta sea obviada o pueda variar la naturaleza de los actos.

Sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia, del máximo intérprete Constitucional.

Sin que sea óbice a la conclusión alcanzada, el criterio 1ª. CCLXVIII/2012, de rubro "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE LOS ACTOS QUE LO INTEGRAN TRATÁNDOSE DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD"¹⁵, en el que la Primera Sala consideró que

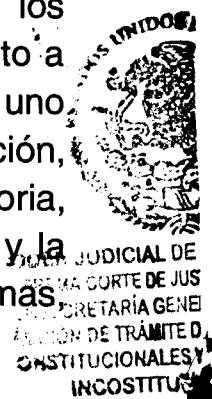
¹⁵ El texto de la tesis aislada dice: "En la jurisprudencia P./J. 35/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.", el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que en la acción de inconstitucionalidad los actos integrantes del procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general resultante, por lo que es improcedente impugnar individualmente cada fase de éste, pues no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través de su análisis conjunto con motivo de la publicación de la norma, porque es hasta ese momento cuando los actos adquieren definitividad. Ahora bien, a diferencia de lo anterior, en la controversia constitucional las fases del procedimiento legislativo pueden reclamarse sin que pueda alegarse falta de definitividad, ya que en este medio de control no hay limitación a la impugnación de normas generales, lo que permite atacar actos concretos que integran cada una de las fases del

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019**

en controversia constitucional, las fases del procedimiento legislativo pueden impugnarse sin que pueda alegarse falta de definitividad, ya que en este medio de control no hay limitación a la impugnación de normas generales, lo que permite la impugnación de los actos concretos que integran cada una de las fases del procedimiento legislativo, mientras sean impugnadas por los poderes con legitimación específica en el artículo 105, y estos se encuentren impugnando una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado.

Lo anterior, toda vez que las consideraciones con base en las cuales la Primera sala de este Tribunal determinó la procedencia de la controversia, de manera alguna son obligatorias para esta Segunda Sala, a la cual le resultan obligatorios únicamente los criterios sustentados en los juicios de controversia constitucional cuando son aprobados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos.

Bajo esa tesitura, con independencia de que se cumplan los supuestos establecidos en la tesis que cita la recurrente, en cuanto a que sí se ve afectado el ámbito competencial del Municipio y que es uno de los entes previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución, lo cierto es que se trata de una tesis aislada que no resulta obligatoria, por lo que los agravios formulados en relación con su aplicación y la inexactitud de las consideraciones del acuerdo recurrido en esos temas son infundados.



Aunado a lo anterior, las tesis jurisprudenciales citadas tanto en el acuerdo recurrido como en la presente ejecutoria, relativas a la definitividad de los actos impugnables en controversia constitucional, no han sido modificadas o superadas por este Tribunal Constitucional, por lo que son de carácter obligatorio y plenamente aplicables al caso como se ha expuesto.

Por otra parte, la recurrente señala que la declaratoria de incorporación a la Constitución del Estado de Baja California de la reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, fue emitida por el Congreso estatal el veintitrés de julio del año en curso, por lo que se ha

procedimiento legislativo, siempre que lo hagan los poderes legitimados por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éstos aleguen una transgresión a su ámbito constitucional de competencias asignado". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 580, Registro: 2002365.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019****PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

superado el problema de definitividad aducido en el acuerdo de desechamiento.

Al respecto, debe decirse que el hecho de que el proceso legislativo de reforma al precepto transitorio en cuestión haya culminado, no modifica las consideraciones expuestas, pues la publicación de la norma general surgida de este procedimiento solo da lugar a que, a partir de ese momento, pueda ser impugnada a través de la controversia constitucional, como se ha reiterado en esta ejecutoria.

Por último, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, en el caso no es aplicable la jurisprudencia P./J. 160/2000, intitulada *"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES FACTIBLE SU OTORGAMIENTO CONTRA LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA NORMA ELECTORAL, CUANDO ESTOS ACTOS NO SE HAN EJECUTADO Y SE ALEGA, POR EL PODER EJECUTIVO, VIOLACIÓN AL DERECHO DE VETO"*.¹⁶

Es así, porque si bien en la Controversia Constitucional 8/2000, de la que derivó el Recurso de Reclamación 37/2000 que dio lugar al criterio invocado, se impugnó un acto emitido antes de la publicación de una norma, a saber, el acuerdo expedido por la Legislatura del Estado de México, en el cual tuvo por no presentadas las observaciones realizadas por el Gobernador del Estado al decreto aprobado por la citada legislatura el quince de octubre de mil novecientos noventa y

¹⁶ El Texto dice: "En materia de controversia constitucional es factible conceder la suspensión en contra de la promulgación y publicación de una norma electoral, cuando estos actos no se han llevado a cabo y el Poder Ejecutivo aduce en su demanda que el Congreso no le respetó su derecho de veto, ya que con su otorgamiento no se contravienen las disposiciones contenidas en los artículos 14, último párrafo y 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, por un lado, la prohibición contenida en el primero de los mencionados numerales de conceder la suspensión respecto de normas generales, se refiere a las que por razón de su promulgación y publicación ya han adquirido los atributos propios de la ley, como son la generalidad, la obligatoriedad y el inicio de su vigencia, prohibición que no opera cuando los citados actos no se han realizado; y, por el otro, en cuanto a los supuestos de improcedencia de la medida cautelar previstos en el artículo 15 de la ley de la materia, tampoco se actualizan, ya que no se pone en peligro la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones del orden jurídico mexicano, pues si bien es verdad que el procedimiento legislativo de creación y modificación de leyes encuadra en ese concepto, también lo es que lo que se pretende con la paralización del procedimiento es, precisamente, salvaguardar el orden constitucional, evitando la promulgación y publicación de un decreto legislativo en cuyo proceso de formación pudieran no haberse observado las prescripciones constitucionales correspondientes; además de que con la concesión de la suspensión no se afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, en tanto que existe un interés general en que el procedimiento legislativo se apegue a las prescripciones constitucionales, como es la facultad del Ejecutivo de vetar una ley o decreto aprobado por la legislatura; y, por otro lado, de no otorgarse la suspensión, el Ejecutivo tendría la obligación de promulgar y ordenar que se publique la ley, con lo que quedaría sin materia la controversia constitucional". Semanario Judicial de la federación, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1118, Registro 190659.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019**

nueve, mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Electoral y se instruye al Ejecutivo local para que culmine el citado trámite legislativo, promulgando y publicando el decreto de reformas referido; también lo es que en el Recurso de Reclamación del que derivó la tesis que la recurrente aduce que debió aplicarse, se analizó la negativa de la suspensión respecto de la promulgación y publicación de una norma electoral cuando el Poder Ejecutivo Federal alega una violación a su derecho de veto, lo cual no guarda semejanza con el asunto que nos ocupa.

Aunado a lo anterior, tanto el Recurso de Reclamación 37/2000-CA, como la Controversia Constitucional de la que derivó -8/2000-, se resolvieron por el Tribunal Pleno en sesiones de treinta y uno de octubre de dos mil y treinta y uno de mayo de dos mil uno, esto es, con anterioridad a la emisión de las jurisprudencias en que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que la controversia constitucional es improcedente respecto de “actos no definitivos”, como acontece respecto de normas que no hubieren sido publicadas o promulgadas, los dictámenes legislativos o las actuaciones realizadas dentro de los procesos legislativos.

Consecuentemente, al resultar infundados los agravios de la recurrente, procede confirmar el acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, dictado por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, en el que se decretó el desechamiento de la controversia constitucional 271/2019.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo emitido el veintitrés de julio de dos mil diecinueve por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, en la controversia constitucional 271/2019.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.



**RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019**

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., Yasmín Esquivel Mossa y Presidente Javier Laynez Potisek. Ausente el Ministro José Fernando Franco González Salas (ponente). El Ministro Javier Laynez Potisek hizo suyo el asunto.

Firman el Ministro Presidente y Ponente que hizo suyo el asunto y la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala, quien autoriza y da fe.

**PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA
Y PONENTE QUE HIZO SUYO EL ASUNTO**

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA

JAZMÍN BONILLA GARCÍA

**A FEDERACIÓN
CORTA DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDOS
CONTROVERSIA
DE ACCIONES DE
RECLAMACIÓN**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LA SUSCRITA ADRIANA CARMONA CARMONA HACE CONSTAR QUE LAS HOJAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN SESIÓN DE DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019. RECURRENTE: MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LAS CUALES REFLEJAN TANTO LOS AJUSTES ACEPTADOS Y VOTADOS POR LOS MINISTROS EN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, COMO EL SENTIDO DE LA DECISIÓN ADOPTADA EN FORMA UNÁNIME POR LA Y LOS MINISTROS INTEGRANTES DE ESTA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS SON: PRIMERO. ES INFUNDADO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. SEGUNDO. SE CONFIRMA EL

RECURSO DE RECLAMACIÓN 139/2019-CA, DERIVADO
DE LA CONTROVERSI A CONSTITUCIONAL 271/2019

ACUERDO EMITIDO EL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE POR LOS
MINISTROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECESO DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN LA CONTROVERSI A CONSTITUCIONAL 271/2019. VA
DEBIDAMENTE COTEJADA, SELLADA, RUBRICADA Y FOLIADA.

Revisó: ACH

En 22 OCT 2019 se firmó el engrose y pasa a la Actuaría

En 23 OCT 2019 y Por medio de lista se
nunció la resolución anterior a las partes. Consta

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION
POR MEDIO DE LISTA. DOY FE

SUP
JUSTIC
SE
SECRETAR

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
JURISDICCION
SECCION DE TRAM
CONSTITUCION
INCOG



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En la Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.-
Carmina Cortés Rodríguez Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -----

CERTIFICA

Que la anterior es copia fiel y exacta de la sentencia de dos de octubre
de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en el **recurso de reclamación 139/2019-
CA, derivado de la controversia constitucional 271/2019**, promovido
por el Municipio de Mexicali, Baja California, y se expide en diez (10)
fojas útiles, debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, para
integrarse a la citada controversia constitucional.-----

Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de veinticuatro
de octubre del año en curso, dictado por el **Ministro Arturo Escobar
Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. CONSTE.**-----



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

SIN TEXTO

PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INSTRUCION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

94

FORMA A-34

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 271/2019
ACTOR: MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Javier Laynez Potisek, instructor en el presente asunto**, con lo siguiente:

Constancia	Registro
Copia certificada de la resolución de dos de octubre del año en curso, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 139/2019-CA .	Sin registro

Documental recibida el veintitrés de octubre del año en curso en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de este Alto Tribunal. Conste.

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

Agréguese al expediente, para que surta efectos legales, la copia certificada de la resolución de cuenta, dictada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en el recurso de reclamación **139/2019-CA**, en el que se confirmó el auto recurrido de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, emitido en el presente asunto, por tanto, **se ordena archivar este expediente como asunto concluido**.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Javier Laynez Potisek**, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

EL 05 NOV 2019; SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS
INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTELEDE. CONSTA
SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN
VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS, SE TIENE
POR HECHA LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.

